

**EVIDENCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL NARCOTRAFICO EN EL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA EN LOS AÑOS 2010 AL 2020**

**DAVID OMEGA NARVAEZ ROSERO
CARLOS ALBERTO SALINAS**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMIA
SANTIAGO DE CALI
2025**

**EVIDENCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL NARCOTRAFICO EN EL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA EN LOS AÑOS 2010 AL 2020**

**DAVID OMEGA NARVAEZ ROSERO
CARLOS ALBERTO SALINAS**

**Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar por el título de profesional
en Economía**

**Director del trabajo de grado: María Fernanda Hernández Cabrera
Mg. Desarrollo Sostenible**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ECONOMIA
SANTIAGO DE CALI
2025**

Santiago de Cali, 11 de mayo de 2025

Doctor (a)
Fabián Osorio
Decano
Facultad De Ciencias Económicas y Administrativas
Pontificia Universidad Javeriana
Cali, Valle del Cauca

Por medio de la presente estamos entregando a usted el Trabajo de Grado cuyo título es
“EVIDENCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL NARCOTRAFICO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN LOS AÑOS 2010 AL 2020 “.

Esperamos que este Trabajo cumpla con los requisitos académicos exigidos y que alcance el
propósito para el cual fue elaborado.

Atentamente

David O. Narváez.

David Omega Narváez Rosero
1110284304

Carlos Salinas

Carlos Alberto Salinas
8973003

Santiago de Cali, 11 de mayo 2025

Doctor:

JAIME RAFAEL AHCAR OLMOS

Director programa Economía

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pontificia Universidad Javeriana Cali

La Ciudad

Por medio de la presente me permito comunicarle, que en mi calidad de tutora del trabajo de grado he leído detenidamente el informe final del trabajo de grado **“EVIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL NARCOTRAFICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN LOS AÑOS 2010 AL 2020”**, realizado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, David Omega Narváez Rosero y Carlos Alberto Salinas, identificados con la cédula de ciudadanía 1110284304 y 1007489296 y el ID institucional 8972674 y 8973003, y considero que cumple con todos los requisitos para ser presentado a evaluadores.



Maria Fernanda Hernández Cabrera

Mg. Desarrollo Sutentable

Tutor del proyecto.

ARTÍCULO 23 de la resolución N° 13 de julio 6 de 1946

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque la Tesis no contenga ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas al anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.

**“EVIDENCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL NARCOTRAFICO
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN LOS AÑOS 2010 AL
2020”** Aprobado por el Comité de Trabajos de Grado en cumplimiento
de los requisitos exigidos por la Pontificia Universidad Javeriana para

FABIAN OSORIO
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Nombre (s) Apellido (s)
Director Adjunto
Maestría en _____

Nombre (s) Apellido (s)
Jurado

Nombre (s) Apellido (s)
Director del Trabajo de Grado

Santiago de Cali, fecha (día, mes y año)

Índice de contenido

Introducción.....	9
Vacío de conocimiento o justificación	11
Objetivo general.....	12
Objetivos específicos	12
Estado del arte	12
Marco teórico.....	15
Metodología.....	17
Evidencia de las transformaciones sociales, económicas y ambientales asociadas al narcotráfico en el departamento del Cauca.....	18
Evolución general del mercado laboral en el departamento del Cauca	19
Evolución de los cultivos ilícitos en los departamentos con mayores hectáreas en Colombia	24
Incidencia de la pobreza extrema en el Cauca frente a los principales de los departamentos del país	27
PIB por habitante del departamento del Cauca frente a los principales departamentos del país y la capital.....	31
Participación del Cauca en el PIB de Colombia frente a los principales departamentos y la capital	38
Participación del Cauca en el PIB de Colombia frente a departamentos con economías reducidas y problemáticas sociales similares.....	43
Exclusión territorial, pobreza estructural y condiciones de vulnerabilidad	46
Educación, abandono escolar, retracción y pérdida de oportunidades	47
Ilícitos y violencia armada, sus efectos críticos	49
Adolescencia, niñez y reclutamiento forzado	49
Igualdad étnica y territorial, los pueblos indígenas y afrodescendientes	50
Consumo y prevención de sustancias psicoactivas y sus retos emergentes	51
Medio ambiente y sostenibilidad, el impacto de los cultivos ilícitos.....	52
Deforestación asociada a los cultivos ilícitos	52
Infancia, adolescencia y narcotráfico.....	53
Salud infantil y narcotráfico, un retroceso en el bienestar básico	54
Fragilidad institucional frente al narcotráfico y las debilidades de la respuesta estatal.....	55
Hallazgos, conclusiones y recomendaciones	56
Implicaciones de los hallazgos	56
Hallazgos principales.....	57
Conclusiones	58
Recomendaciones	59
Referencias bibliográficas	61

Tabla de figuras

Figura 1	19
Figura 2	24
Figura 3	27
Figura 4	31
Figura 5	38
Figura 6	43

EVIDENCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL NARCOTRAFICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN LOS AÑOS 2010 AL 2020

Introducción

El departamento del Cauca, conocido por su riqueza cultural y biodiversidad, enfrenta graves desafíos derivados del narcotráfico, que ha moldeado significativamente su estructura económica durante el período 2010-2020. Esta economía ilícita, centrada en la producción y comercialización de cultivos de coca, representa hasta el 60% de los ingresos generados en áreas rurales del departamento (García, 2022). Este predominio de actividades ilegales ha desplazado la producción agrícola tradicional, debilitando sectores productivos formales y limitando el desarrollo sostenible. Además, la economía del narcotráfico ha distorsionado el mercado laboral y el valor de la tierra en el Cauca. Según Martínez y Ríos (2021), el precio de la tierra en áreas controladas por grupos armados vinculados al narcotráfico ha aumentado en un 35% durante los últimos cuatro años, lo que ha desplazado a pequeños agricultores que dependían de la producción de cultivos legales. Este aumento en los costos de producción ha ahogado a las actividades económicas formales, dejando pocas alternativas viables para las comunidades locales.

La violencia ha sido una de las consecuencias más devastadoras del narcotráfico en el Cauca. Durante el periodo analizado, se ha reportado un incremento significativo de los índices de homicidios, directamente relacionado con conflictos entre grupos armados ilegales por el control de rutas y cultivos ilícitos (Rodríguez, 2023). Esta situación ha debilitado aún más a las instituciones locales, dificultando la implementación de políticas públicas y ahuyentando la inversión tanto pública como privada en infraestructura esencial, como carreteras y hospitales (Gómez, 2022).

A pesar de los altos ingresos generados por el narcotráfico, estos recursos están altamente concentrados en manos de un pequeño grupo de actores, lo que ha exacerbado la pobreza y la

desigualdad. Según Ramos y Pérez (2021), más del 70% de los ingresos derivados de esta economía ilícita no se redistribuyen localmente, perpetuando las condiciones de pobreza extrema en las comunidades rurales. La falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y agua potable es particularmente alarmante, afectando gravemente la calidad de vida de los habitantes del Cauca.

El impacto ambiental del narcotráfico también es significativo. La expansión de los cultivos ilícitos ha resultado en la deforestación de más del 20% de las áreas protegidas en el Cauca, además de la contaminación de fuentes hídricas por el uso indiscriminado de químicos (Díaz, 2020). Estos efectos no solo afectan la biodiversidad de la región, sino que también comprometen los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de los recursos naturales para su sustento.

Este trabajo tiene como objetivo evidenciar el impacto económico, social y ambiental del narcotráfico en el departamento del Cauca entre los años 2010 y 2020, explorando las dinámicas estructurales que han perpetuado esta dependencia. Para ello, se propone un análisis integral desde tres dimensiones clave. En el plano económico, se abordarán los mecanismos mediante los cuales esta economía ilícita ha distorsionado la estructura productiva regional, afectando los precios de la tierra, desincentivando la inversión legal y profundizando la informalidad laboral (Martínez & Ríos, 2021; Banco Mundial, 2018). En el plano social, se analizarán las consecuencias sobre el tejido comunitario, incluyendo el desplazamiento forzado, la deserción escolar, el reclutamiento de menores y el debilitamiento institucional, todo ello como manifestaciones de una violencia sistemática asociada al narcotráfico (Rodríguez, 2023; Comisión de la Verdad, 2022). Finalmente, desde una perspectiva ambiental, se revisarán los efectos más evidentes del cultivo ilícito de coca sobre los ecosistemas locales, como la deforestación en zonas protegidas y la contaminación de fuentes hídricas, fenómenos que, aunque tratados brevemente en este estudio, revelan la necesidad

de integrar la sostenibilidad ambiental en futuras intervenciones (Díaz, 2020; UNODC, 2022). Este enfoque permitirá comprender cómo el narcotráfico ha transformado de forma integral la economía, la sociedad y el entorno natural del Cauca, perpetuando condiciones de exclusión, pobreza e inestabilidad territorial.

Vacío de conocimiento o justificación

En línea con la problemática introducida, el departamento del Cauca enfrenta un desafío crítico que afecta profundamente su desarrollo económico y social. El narcotráfico ha generado una dependencia estructural en actividades ilícitas, impactando negativamente las oportunidades de crecimiento sostenible y debilitando los sectores productivos legales. Esta economía ilegal ha absorbido gran parte de los recursos humanos y naturales de la región, limitando el desarrollo de proyectos que podrían mejorar la calidad de vida de la población, como infraestructura, educación y tecnología.

El impacto del narcotráfico no se limita a las dimensiones económicas; también ha intensificado la violencia y debilitado las instituciones locales. Esto ha dificultado la creación de políticas efectivas para contrarrestar sus efectos y promover alternativas viables en las comunidades.

Mientras tanto, los ingresos generados por el narcotráfico se concentran en unos pocos actores, perpetuando la pobreza y la desigualdad en gran parte de la población, especialmente en las áreas rurales. Este contexto exige una reflexión profunda sobre las dinámicas económicas y sociales que el narcotráfico ha instaurado en el Cauca. Por lo cual este trabajo se propone dar respuesta a la siguiente pregunta: ***¿De qué manera el narcotráfico ha transformado las condiciones económicas, sociales y ambientales del departamento del Cauca entre 2010 y 2020, y qué evidencia respalda estos cambios?***

Objetivo general

- Analizar la evidencia económica y social del narcotráfico en el departamento del Cauca entre 2010 y 2020, identificando los principales cambios en la estructura productiva, el mercado laboral, las condiciones de vida de la población y del medio ambiente.

Objetivos específicos

- Evaluar cómo las actividades relacionadas con el narcotráfico han afectado indicadores económicos clave como el PIB regional, la inversión, el empleo formal, y sociales como la pobreza, la desigualdad y el acceso a servicios básicos en la región.
- Identificar las dinámicas clave que perpetúan la dependencia del narcotráfico y obstaculizan el desarrollo económico sostenible en el Cauca.
- Proponer acciones en estrategias y políticas públicas orientadas a mitigar los impactos negativos del narcotráfico en los indicadores económicos y sociales del Cauca, fomentando alternativas de desarrollo sostenible en la región.

Estado del arte

El narcotráfico es un fenómeno complejo que ha dejado una huella profunda en las economías y sociedades a nivel mundial, nacional y regional. Su impacto se extiende más allá del simple comercio de sustancias psicoactivas, influyendo en la estructura productiva, las condiciones de vida de la población y el medio ambiente. Para comprender su influencia en el departamento del Cauca entre 2010 y 2020, es esencial analizar sus efectos desde una perspectiva global, pasando por el contexto colombiano y aterrizando en la realidad específica de esta región.

A nivel mundial, el narcotráfico ha evolucionado de actividades locales a redes transnacionales altamente organizadas. Su expansión ha sido impulsada por la creciente demanda de sustancias ilícitas en mercados desarrollados y facilitada por avances tecnológicos que han permitido una

producción y distribución más eficientes. El narcotráfico genera ingresos significativos para organizaciones criminales, pero también desestabiliza economías al fomentar mercados paralelos y actividades ilícitas que socavan las estructuras económicas formales. Además, la violencia asociada al control de territorios y rutas de distribución impone costos sociales y económicos considerables en las regiones afectadas, lo que lleva a una mayor inestabilidad política y social (UNODC, 2022).

Colombia ha sido un actor central en la dinámica global del narcotráfico, especialmente en la producción y exportación de cocaína. Durante las décadas de 1980 y 1990, el país se consolidó como el principal productor mundial de esta droga, lo que tuvo profundas implicaciones económicas y sociales. El narcotráfico financió a grupos armados ilegales, exacerbando el conflicto interno y generando violencia generalizada. Las políticas implementadas, como el Plan Colombia, buscaron combatir esta problemática a través de estrategias de erradicación de cultivos ilícitos y fortalecimiento militar. Sin embargo, los resultados han sido mixtos, ya que, aunque se lograron reducciones temporales en áreas cultivadas, la resiliencia de las economías ilícitas y la adaptación de las organizaciones criminales han mantenido vigente el problema (DNP, 2001).

El departamento del Cauca ha sido especialmente vulnerable a las dinámicas del narcotráfico debido a su ubicación geográfica, condiciones socioeconómicas y presencia histórica de cultivos ilícitos. La dependencia de las economías locales en estos cultivos ha perpetuado ciclos de pobreza y violencia. La teoría de la 'Trampa de Pobreza' sugiere que esta dependencia limita las inversiones en infraestructura y educación, esenciales para el desarrollo sostenible. Además, las actividades relacionadas con el narcotráfico han distorsionado los mercados legales, alterando el valor de la tierra y los patrones de empleo, lo que incrementa la desigualdad y limita el acceso a servicios básicos como educación y salud (Defensoría del Pueblo, 2019).

La economía ilícita comprende aquellas actividades económicas que se desarrollan fuera del marco legal y que no son registradas oficialmente. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas. Las economías ilícitas suelen surgir en contextos donde el Estado tiene una presencia limitada, y pueden llegar a representar una parte significativa de la economía en ciertas regiones, afectando la estabilidad económica y social. En el Cauca, el narcotráfico ha alterado la estructura productiva de la región, generando un mercado de trabajo informal en el que la población joven ve en el cultivo y procesamiento de coca una fuente de ingresos más rentable que la agricultura tradicional (Fedesarrollo, 1997).

El narcotráfico también ha intensificado conflictos preexistentes en el Cauca y ha generado nuevos focos de violencia. La disputa por el control de rutas de producción y distribución de drogas involucra a organizaciones criminales, grupos armados ilegales y fuerzas del Estado, lo que ha exacerbado la inseguridad en la región. Según el Fondo Monetario Internacional, la violencia relacionada con el narcotráfico impone barreras significativas al crecimiento económico al reducir la inversión extranjera y afectar la productividad de la fuerza laboral (IMF, 2019). La presencia de economías ilegales también ha dificultado el establecimiento de una economía formal estable, lo que ha reforzado los ciclos de violencia y exclusión social.

En términos ambientales, el narcotráfico ha impactado negativamente la sostenibilidad de los ecosistemas en el Cauca. La deforestación para el cultivo de coca, la contaminación de suelos y cuerpos de agua por el uso de químicos y la pérdida de biodiversidad son algunos de los efectos más visibles de esta problemática. La degradación del medio ambiente compromete la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y afecta la resiliencia de los ecosistemas locales (UNODC, 2022). Además, la erradicación forzosa de cultivos ha generado conflictos

sociales entre comunidades campesinas y el Estado, lo que ha llevado a protestas y enfrentamientos violentos.

El análisis del impacto del narcotráfico en el Cauca entre 2010 y 2020 permite comprender cómo las economías ilegales han modificado la estructura económica, social y ambiental de la región. La interacción entre violencia, economía informal y degradación ambiental ha generado una crisis multidimensional que requiere estrategias integrales para su solución. La presencia del narcotráfico no solo ha afectado la economía del departamento, sino que ha condicionado su desarrollo a largo plazo, limitando las oportunidades de crecimiento sostenible y exacerbando la desigualdad estructural que caracteriza a esta región del suroccidente colombiano.

Marco teórico

La evidencia del narcotráfico en el Cauca se fundamenta en teorías clave que explican las dinámicas económicas y sociales que este fenómeno genera en la región. Estas teorías no solo aportan una comprensión más profunda de las causas y consecuencias del problema, sino que también orientan la formulación de estrategias para abordar sus efectos.

La teoría de la 'Trampa de Pobreza' sostiene que las economías locales atrapadas en actividades ilícitas enfrentan barreras estructurales que les impiden desarrollarse. En el Cauca, esta teoría se refleja en la dependencia hacia los cultivos ilícitos, que limita las inversiones en infraestructura, educación y actividades productivas legales. Esta dinámica perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad, afectando especialmente a las comunidades rurales (Rodríguez, 2023).

La teoría de la 'Economía Ilícita' describe cómo las actividades ilegales generan una economía paralela que opera fuera de los mercados formales. En el Cauca, esta economía ha incrementado los costos de la tierra y distorsionado los patrones de empleo, lo que ha exacerbado la desigualdad económica. Además, ha reducido la competitividad de las actividades legales, como la agricultura

tradicional, y ha limitado el acceso a servicios básicos (Martínez & Ríos, 2021). Esta economía ilegal también se sostiene por su alta rentabilidad a corto plazo, lo que representa un fuerte desincentivo para la adopción de actividades productivas legales que, aunque sostenibles en el tiempo, no ofrecen beneficios económicos inmediatos comparables. Así, muchas comunidades rurales optan por mantener su vinculación a los cultivos ilícitos, lo cual perpetúa el ciclo de ilegalidad y limita la transición hacia modelos económicos alternativos (UNODC, 2016; Díaz, 2020).

La violencia generada por el narcotráfico en el Cauca es un elemento central para entender su impacto. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que controlan las rutas de distribución y producción han incrementado los índices de homicidios y debilitado las instituciones locales. Esta dinámica dificulta la implementación de políticas públicas y disuade la inversión, perpetuando un entorno de inseguridad (Rodríguez, 2023; Ramos & Pérez, 2021). Entre 2010 y 2018, el Cauca fue uno de los departamentos más afectados por la violencia, con 19.473 homicidios (Comisión de la Verdad) y un alto número de desplazamientos forzados debido a grupos armados. La violencia de género también aumentó, con el 82,7% de los casos en zonas urbanas (Observatorio de Asuntos de la Mujer del Cauca).

El impacto ambiental del narcotráfico en el Cauca es otro factor crítico a considerar. La deforestación de más del 20% de áreas protegidas y la contaminación de fuentes hídricas debido al uso de químicos en los cultivos ilícitos han afectado significativamente la biodiversidad de la región. Esto no solo compromete los ecosistemas, sino también los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de los recursos naturales para su supervivencia (Díaz, 2020).

El mercado laboral en el Cauca ha sufrido una fuerte distorsión entre 2010 y 2018 debido al narcotráfico, promoviendo la informalidad y desplazando actividades económicas legales. En

2016, la UNODC reportó que el Cauca era uno de los departamentos con mayor extensión de cultivos ilícitos, lo que impactó negativamente la economía local. Como consecuencia, la informalidad laboral alcanzó el 85% en zonas rurales en 2015 (DANE, 2016), reduciendo los ingresos formales y debilitando el sistema de seguridad social.

Metodología

Este estudio tiene un enfoque descriptivo y exploratorio, orientado a analizar las transformaciones económicas, sociales y ambientales asociadas al narcotráfico en el departamento del Cauca durante el período 2010-2020. Se emplearán técnicas de análisis descriptivo univariado y comparativo, como el cálculo de promedios, porcentajes, tasas de variación y análisis de tendencias temporales. Además, se realizarán comparaciones entre indicadores del Cauca y el promedio nacional, con el fin de identificar brechas estructurales.

Se utilizaron fuentes secundarias provenientes de informes institucionales de la UNODC, el DANE, el Banco Mundial, CEPAL, INDEPAZ, la Cámara de Comercio del Cauca, el Observatorio de Asuntos de la Mujer del Cauca, y reportes de la Gobernación del Cauca. Las variables seleccionadas —como el Producto Interno Bruto departamental, las tasas de informalidad laboral, los niveles de pobreza, la concentración de cultivos ilícitos, los homicidios y la deserción escolar— fueron elegidas por su capacidad para reflejar los principales impactos del narcotráfico en el desarrollo regional.

Aunque el objetivo principal no es establecer relaciones causales, el análisis buscará identificar posibles correlaciones entre algunas variables (por ejemplo, entre la concentración de cultivos ilícitos y los niveles de pobreza o violencia), lo cual enriquecerá la comprensión del fenómeno.

La sistematización y visualización de los datos se realizará mediante herramientas como Microsoft Excel y R, las cuales permitirán elaborar gráficas comparativas, tablas de evolución histórica e indicadores agregados por municipio y año.

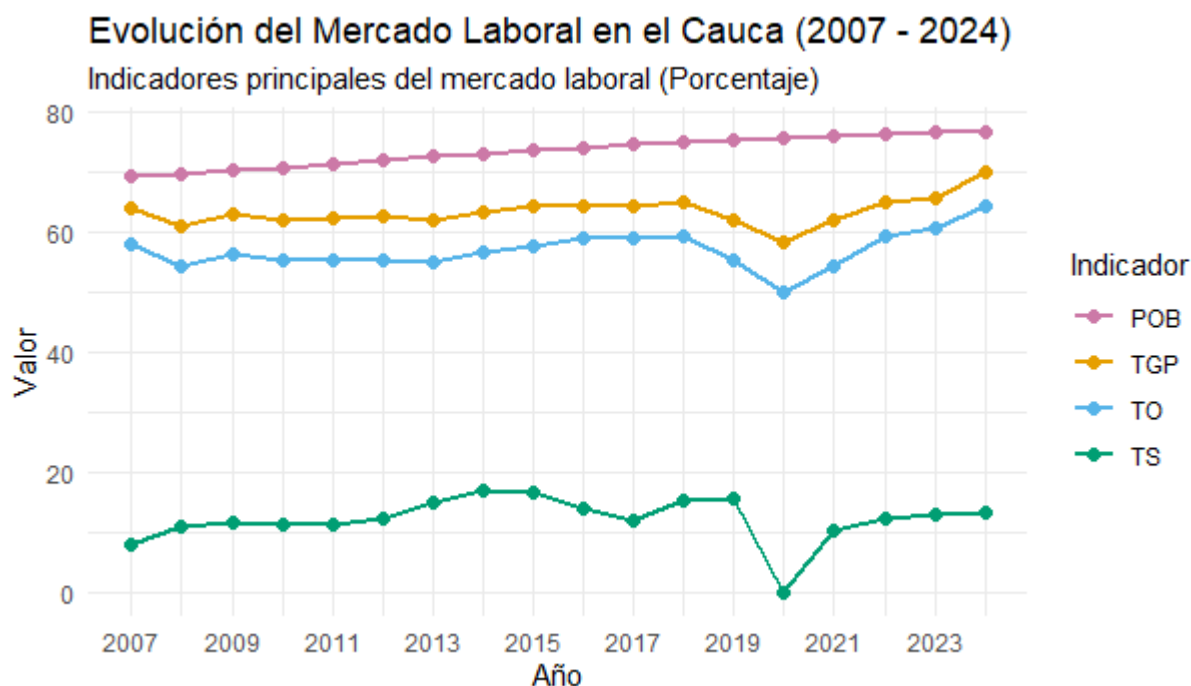
Finalmente, se reconoce que existen limitaciones de acceso a datos actualizados y desagregados para ciertos indicadores, especialmente en zonas rurales del Cauca. Estas restricciones se mencionarán y considerarán al momento de interpretar los hallazgos.

Evidencia de las transformaciones sociales, económicas y ambientales asociadas al narcotráfico en el departamento del Cauca

En esta sección se presentan los principales hallazgos empíricos sobre el impacto del narcotráfico en el departamento del Cauca entre 2010 y 2020. A partir del análisis de datos cuantitativos y cualitativos extraídos de fuentes oficiales donde se evidencia cómo este fenómeno ha transformado de forma profunda la economía, la estructura social y el medio ambiente del territorio. Los resultados se organizan en tres dimensiones: económica, social y ambiental, destacando los patrones más relevantes y comparándolos, cuando es posible, con el promedio nacional, la capital o con otros departamentos similares.

Evolución general del mercado laboral en el departamento del Cauca

Figura 1



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – Serie anual por departamentos 2007 – 2024.

Entre los años 2007 y 2024, el mercado laboral del departamento del Cauca experimenta una evolución marcada por dinámicas irregulares en las principales tasas laborales, cuyas fluctuaciones adquieren un nuevo significado cuando se analizan bajo la lupa de la creciente penetración del narcotráfico en la región. La población en edad de trabajar (PET) muestra un crecimiento constante, pasando de 69,21 % en 2007 a 76,64 % en 2024, lo cual indica una presión creciente sobre el mercado laboral que demanda una mayor generación de empleo formal. Sin embargo, esta expansión poblacional no se traduce de forma consistente en una mejora de las condiciones laborales. La Tasa Global de Participación (TGP), que refleja la proporción de la población en edad de trabajar que participa activamente en el mercado laboral, presenta una tendencia más errática, desde un 63,97 % en 2007, cae gradualmente a niveles mínimos de 58,33 % en 2020, precisamente cuando se registra un salto dramático en las hectáreas dedicadas al cultivo

de coca. Esta contracción coincide con el inicio de una fuerte expansión del narcotráfico en el Cauca, y no puede interpretarse únicamente como un efecto de la pandemia por COVID-19. El descenso sostenido de la TGP en los años previos y la lenta recuperación posterior sugiere un desplazamiento del trabajo formal hacia actividades informales o ilegales, muchas de ellas vinculadas a economías ilícitas como la de los cultivos de uso ilícito.

La Tasa de Ocupación (TO), por su parte, refleja una reducción continua desde 57,96 % en 2007 hasta alcanzar un punto crítico de 49,92 % en 2020, lo que se traduce en una pérdida significativa de empleos formales o legalmente reconocidos en la región. Aunque existe una recuperación paulatina hasta 64,32 % en 2024, este repunte no necesariamente representa un fortalecimiento del empleo digno o sostenible, especialmente si se tiene en cuenta que este periodo coincide con el auge de la economía del narcotráfico en la región. Este crecimiento paralelo entre la ocupación y la expansión de los cultivos ilícitos puede reflejar una mayor absorción laboral en actividades vinculadas directa o indirectamente con el narcotráfico, ya sea en labores de siembra, cosecha, procesamiento, transporte o protección de cultivos, todos ellos componentes de cadenas informales que ofrecen ingresos inmediatos, pero en contextos de alta precariedad y riesgo. La ocupación entonces no es sinónimo de bienestar económico, sino de una inserción laboral que reproduce las condiciones de exclusión, ilegalidad y vulnerabilidad propias de los territorios capturados por lógicas criminales.

Respecto a esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2020) en su informe de monitoreo de territorio afectados por cultivos ilícitos para 2019 proporciona información que permite respaldar lo dicho anteriormente. Según este informe, Colombia concentra el 70 % del total de cultivos de coca en el mundo, y entre 2017 y 2019 se estima que

entre 124.600 y 169.000 hogares cultivaban coca, lo cual representa aproximadamente el 50 % de todos los hogares que la cultivan a nivel global. A esta cifra se suman múltiples hogares que, aunque no siembran directamente, participan en la cadena productiva como jornaleros, recolectores, transportadores, proveedores de insumos, comerciantes y actores armados. En total, la economía asociada al narcotráfico en Colombia generó, solo en 2019, alrededor de COP \$6,3 billones (USD \$1.915 millones) en transacciones, involucrando ingresos derivados de la venta de hoja, pasta básica, y gastos en insumos, mano de obra y servicios logísticos y de seguridad.

Estas cifras muestran que el cultivo de coca y su cadena de valor tienen una importancia económica central en los territorios donde se desarrolla, al punto que, en varios de los municipios más afectados, el valor total de esta economía supera ampliamente el presupuesto público local. Esta realidad convierte al narcotráfico en un eje de absorción laboral para decenas de miles de personas que, ante la ausencia de alternativas lícitas, encuentran en esta economía ilegal una forma de subsistencia. Así, como lo reconoce la propia UNODC, la coca “dinamiza la economía dentro de las zonas donde está presente”, y cualquier interrupción abrupta de su cultivo afectaría no solo a los cultivadores directos, sino también a una red más amplia de trabajadores y proveedores locales.

En este sentido, la ocupación entonces no es sinónimo de bienestar económico, sino de una inserción laboral que reproduce las condiciones de exclusión, ilegalidad y vulnerabilidad propias de los territorios capturados por lógicas criminales. Aunque los indicadores laborales convencionales muestran una recuperación cuantitativa de la ocupación, los datos cualitativos y contextuales permiten comprender que una parte de esta mejora puede estar explicada por el auge de economías ilícitas como el narcotráfico, que generan empleo en condiciones precarias, informales y al margen de la legalidad. De esta manera, el uso de fuentes confiables como la

UNODC permite establecer una relación razonada y empíricamente sustentada entre el crecimiento de la ocupación y la expansión de actividades ilícitas en la región.

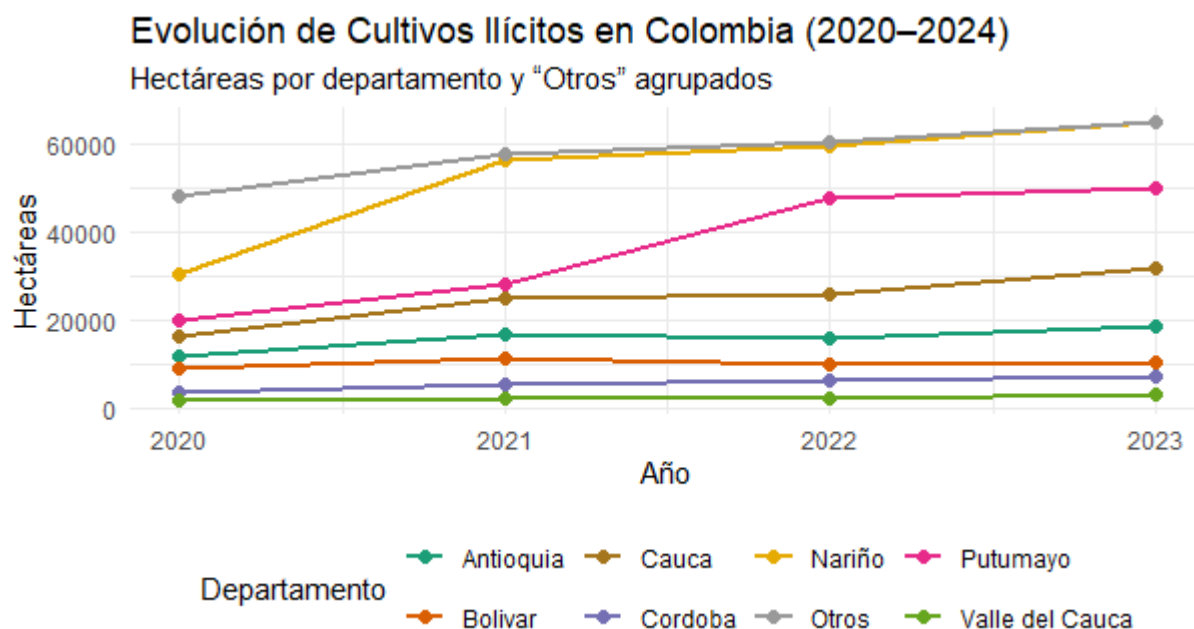
La Tasa de Desempleo (TD) mantiene niveles relativamente elevados en los primeros años de análisis, oscilando entre el 9,39 % y el 11,72 % entre 2007 y 2013, antes de caer progresivamente hasta alcanzar su mínimo en 2016 de 8,06 %. Sin embargo, la reducción de la TD no puede interpretarse linealmente como una mejora del mercado laboral, ya que este descenso coincide con un incremento de la informalidad y con la expansión de alternativas laborales vinculadas al narcotráfico. A partir de 2020, la TD vuelve a aumentar considerablemente con un 14,42 % en 2020 en plena pandemia, pero también en el contexto de un reordenamiento territorial por parte de actores armados, lo cual interrumpe economías locales legales, desplaza fuerza laboral y redirige parte de la mano de obra hacia actividades ilegales que escapan al radar estadístico. El posterior descenso de la TD hasta un 8,21 % en 2024 puede interpretarse no como una mejora sustancial del entorno laboral, sino como una adaptación forzada a las dinámicas del narcotráfico, que absorbe gran parte de la población económicamente activa en condiciones informales o ilícitas.

La Tasa de Subocupación (TS) aporta una dimensión adicional al análisis, al medir el porcentaje de personas que, aunque ocupadas, desean y están disponibles para trabajar más horas. Esta tasa se dispara de forma llamativa entre 2012 y 2015, pasando de 12,46 % a 16,84 %, y alcanza su punto máximo en 2019 con un 15,86 %. Posteriormente, la tasa se desploma a 0 % en 2020 un dato que debe interpretarse con cautela, probablemente afectado por distorsiones estadísticas derivadas de la pandemia o falta de cobertura adecuada y luego se recupera gradualmente. Esta oscilación sugiere una profundización de la precarización laboral, donde muchos trabajadores aceptan empleos por debajo de sus capacidades o necesidades, una característica común de las

economías informales impulsadas por actividades ilegales. Además, este subempleo estructural es un reflejo del deterioro del tejido productivo legal en regiones afectadas por el narcotráfico, donde las oportunidades laborales no solo son escasas sino también fragmentarias, discontinuas y de bajo valor agregado.

Evolución de los cultivos ilícitos en los departamentos con mayores hectáreas en Colombia

Figura 2



Fuente: Elaboración propia con datos de UNODC.

Entre 2020 y 2023 la expansión de los cultivos ilícitos en el departamento del Cauca registra un ascenso sostenido y robusto que refleja, al mismo tiempo, la profunda interrelación entre las dinámicas sociales, la economía local y la economía del narcotráfico. En 2020 el Cauca reportó 16 543,8 hectáreas dedicadas a cultivos ilícitos y al año siguiente se disparó hasta 25 099,1 hectáreas, un incremento de más del 50 % en tan solo doce meses. Aunque el ritmo de crecimiento se atempera ligeramente en 2022 con 26 222,7 hectáreas y vuelve a subir con fuerza en 2023 con 31 843,7 hectáreas, la tendencia general es inequívoca, un arraigo cada vez más profundo de la economía ilícita, que no solo ocupa más territorio, sino que incorpora a un número creciente de familias rurales en cadenas productivas informales, precarias y controladas por actores armados.

Cuando comparado con otros departamentos claves para el análisis como Antioquia con 12 090,2 hectáreas en 2020 hasta 18 785,1 hectáreas en 2023, Bolívar de 9 373,3 hectáreas a 10 770,4

hectáreas, Córdoba de 3 748,8 hectáreas a 7 425,6 hectáreas, Putumayo de 19 986,2 hectáreas a 50 342,7 hectáreas, Valle del Cauca de 1 937,9 hectáreas a 3 361,8 hectáreas y Nariño de 30 751,4 hectáreas a 64 989,8 hectáreas, el Cauca se sitúa sistemáticamente en un lugar intermedio entre los focos más intensos los cuales son Nariño y Putumayo y los de menor magnitud que son Antioquia, Bolívar, Córdoba y Valle del Cauca. El agregado de “Otros” que incluye a los departamentos de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Vaupés y Vichada nos muestra una expansión paralela, pero sin alcanzar los niveles de concentración espacial y social que se observan en los corredores históricos del Cauca.

Este patrón de crecimiento en el Cauca está enraizado en condiciones estructurales muy específicas como lo son la alta ruralidad, débil presencia estatal, conflictos por la tierra y la consolidación de estructuras de poder ilegales que, bajo la lógica del narcotráfico, ofrecen ingresos inmediatos, pero no vías de desarrollo sostenibles. A medida que las hectáreas sembradas aumentan, las comunidades ven reducida su capacidad para diversificar actividades agrícolas legales, al tiempo que se acentúa la dependencia de intermediarios ilícitos para la comercialización. El resultado es un ciclo donde la ganancia rápida corroe las redes de solidaridad comunitaria y precariza el derecho a la tierra, desplazando a pequeños campesinos hacia la informalidad y la violencia.

Además, la evolución observada en el Cauca sugiere una retroalimentación negativa con la inseguridad ya que, a mayor extensión de cultivos, mayores incentivos para el control territorial por parte de grupos armados ilegales, lo cual refuerza la fragmentación social y dificulta la llegada de programas de sustitución de cultivos o de fortalecimiento de cadenas agro productivas alternativas. En comparación, departamentos como Antioquia o el Valle, que presentan coberturas menores y, en algunos casos, estancamientos o ligeras caídas en la superficie cultivada, han

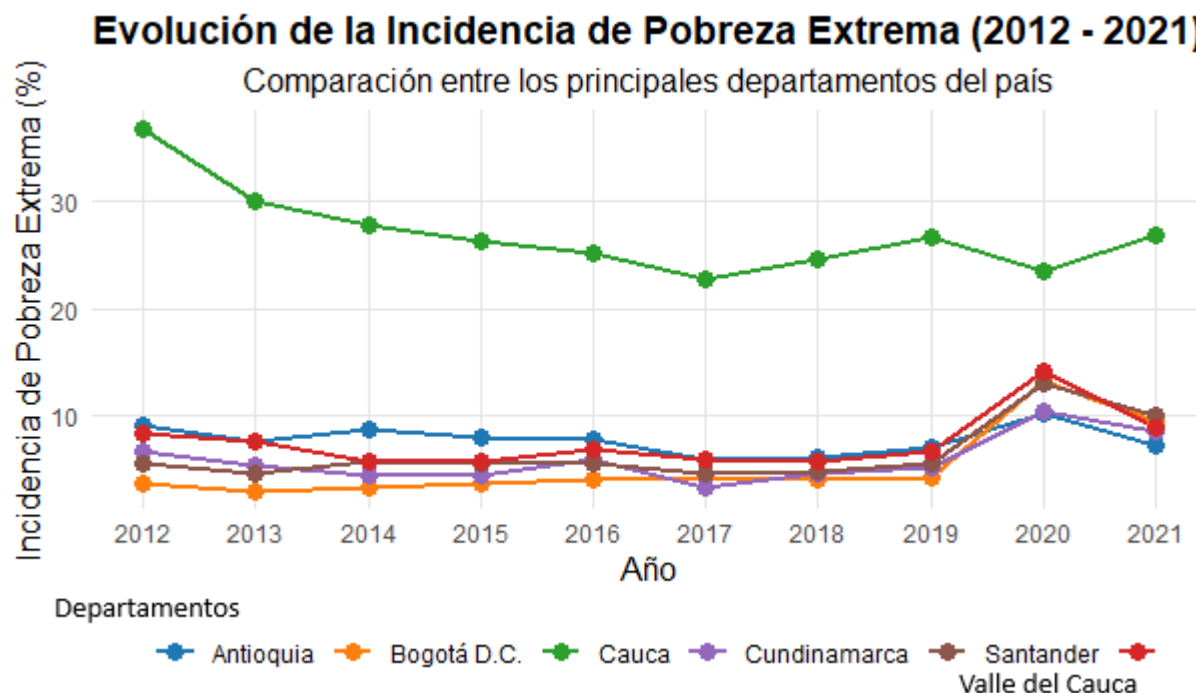
combinado, aunque es cierto que, con dificultad, procesos de erradicación manual y sustitución asistida con iniciativas de desarrollo local que diversifican la economía rural y, por ende, mitigan el poder de los eslabones ilícitos.

La escalada de las hectáreas en el Cauca no puede verse ajena al contexto de marginalidad histórica que ha convertido buena parte de su geografía en corredores estratégicos para la ruta del narcotráfico hacia el Pacífico y hacia países vecinos. Zonas como el norte del departamento y los valles aislados se convierten en enclaves donde la ausencia del Estado es suplida por economías paralelas que ofrecen un “empleo” estable en ausencia de alternativas, pero a costa de legalidad y del tejido social. Esta realidad contribuye a la reproducción de la pobreza estructural porque, si bien aumenta temporalmente el ingreso de los hogares, no genera capital social ni fortalece capacidades productivas que puedan sostener un desarrollo formal, perpetuando así la trampa de dependencia en economías ilícitas o una trampa de pobreza.

Es notable así, la evidencia cuantitativa de los datos que muestran que el Cauca no solo mantiene un nivel elevado de cultivos ilícitos más específicamente el tercero en magnitud entre los departamentos comparados durante todo el periodo, sino que acelera su crecimiento cuando en otras regiones hay señales de estabilización o menores tasas de expansión. Este comportamiento está íntimamente relacionado con estructuras sociales y económicas marcadas por la baja presencia institucional, la alta vulnerabilidad de los medios de vida rurales y el arraigo de economías ilegales que distorsionan los incentivos para diversificar la producción y construir alternativas de largo plazo.

Incidencia de la pobreza extrema en el Cauca frente a los principales de los departamentos del país

Figura 3



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – Incidencia de La Pobreza Monetaria Extrema 2012-2021.

A lo largo del periodo 2012 a 2021, el comportamiento del indicador de incidencia de la pobreza monetaria extrema en el departamento del Cauca revela una trayectoria preocupante, especialmente cuando se compara con los principales departamentos del país. Mientras algunas regiones muestran avances notables en la reducción sostenida de la pobreza extrema, el Cauca inicia el periodo con una cifra alarmante del 36,7% en 2012 y si bien logra reducirla hasta alcanzar un 22,7% en el 2017, la tendencia se revierte en los años posteriores, cerrando 2021 con una tasa del 26,9%. Esta evolución errática y en última instancia regresiva, contrasta fuertemente con la capital Bogotá y departamentos como Cundinamarca o Santander, que mantienen tasas consistentemente bajas, por debajo del 6% en la mayoría del periodo, y a su vez logran resistir de mejor manera los choques económicos, como el de la pandemia en 2020.

La dinámica de descenso y posterior repunte en la pobreza extrema en el Cauca no puede entenderse únicamente desde una perspectiva económica convencional, sino que exige una mirada estructural que incorpore las particularidades sociales y territoriales del departamento. Uno de los factores más determinantes en este comportamiento es la influencia persistente del narcotráfico, que no solo configura las formas de producción y organización social, sino que también distorsiona profundamente los indicadores de bienestar y desarrollo humano.

La presencia del narcotráfico en el Cauca se inserta en un entramado de condiciones estructurales adversas como lo son la alta ruralidad, la débil institucionalidad, conflictos por la tierra y la histórica ausencia del Estado. Estos factores han facilitado la consolidación de economías ilícitas que, si bien ofrecen ingresos inmediatos a ciertas comunidades, no generan procesos sostenibles de inclusión ni permiten la construcción de capacidades productivas legales. En este sentido, el Cauca se encuentra atrapado en lo que la literatura económica denomina una “trampa de pobreza”, entendido como un ciclo en el cual la falta de oportunidades formales conduce a la dependencia de actividades ilegales, las cuales a su vez reproducen condiciones de pobreza y exclusión.

Mientras departamentos como Antioquia o el Valle del Cauca lograron reducir sus tasas de pobreza extrema de forma más consistente gracias a sus estructuras económicas diversificadas y mayor inversión social, el Cauca enfrentó un entorno de creciente violencia e inestabilidad. En 2020, año en el que se desató la crisis por la pandemia de COVID-19, la pobreza extrema en Cauca sube drásticamente a 23,6%, una cifra significativamente más alta que la de Bogotá con 13,2% o Santander con 13,1%, a pesar de que estos departamentos tienen una densidad poblacional mucho mayor. Esta diferencia refleja no solo una mayor vulnerabilidad estructural, sino también la

fragilidad de los medios de vida en el Cauca, que dependen en buena parte de economías informales o ilícitas altamente sensibles a las disrupciones externas.

La economía del narcotráfico, en tanto economía paralela, absorbe fuerza laboral, recursos y territorios, generando una falsa sensación de dinamismo económico en algunas regiones del Cauca. Sin embargo, este tipo de actividad no contribuye al Producto Interno Bruto de manera formal, ni mejora los indicadores de calidad de vida de manera estructural. Más aún, el control territorial por parte de actores armados ilegales genera un entorno de violencia e incertidumbre que desincentiva la inversión, impide la implementación de políticas públicas efectivas y debilita la cohesión social. Esta situación refuerza la reproducción de la pobreza extrema, especialmente en zonas rurales donde la institucionalidad estatal es prácticamente inexistente.

La comparación con departamentos como Cundinamarca, cuya incidencia de pobreza extrema se mantiene por debajo del 6% durante todo el periodo y cae incluso al 3,3% en 2017, ilustra de manera contundente el desfase estructural que sufre el Cauca. No se trata solo de diferencias en el ingreso o la productividad, sino de la existencia de condiciones institucionales, de seguridad y de gobernabilidad que permiten a unas regiones avanzar hacia la reducción de la pobreza, mientras otras como el Cauca se hunden más en la precariedad.

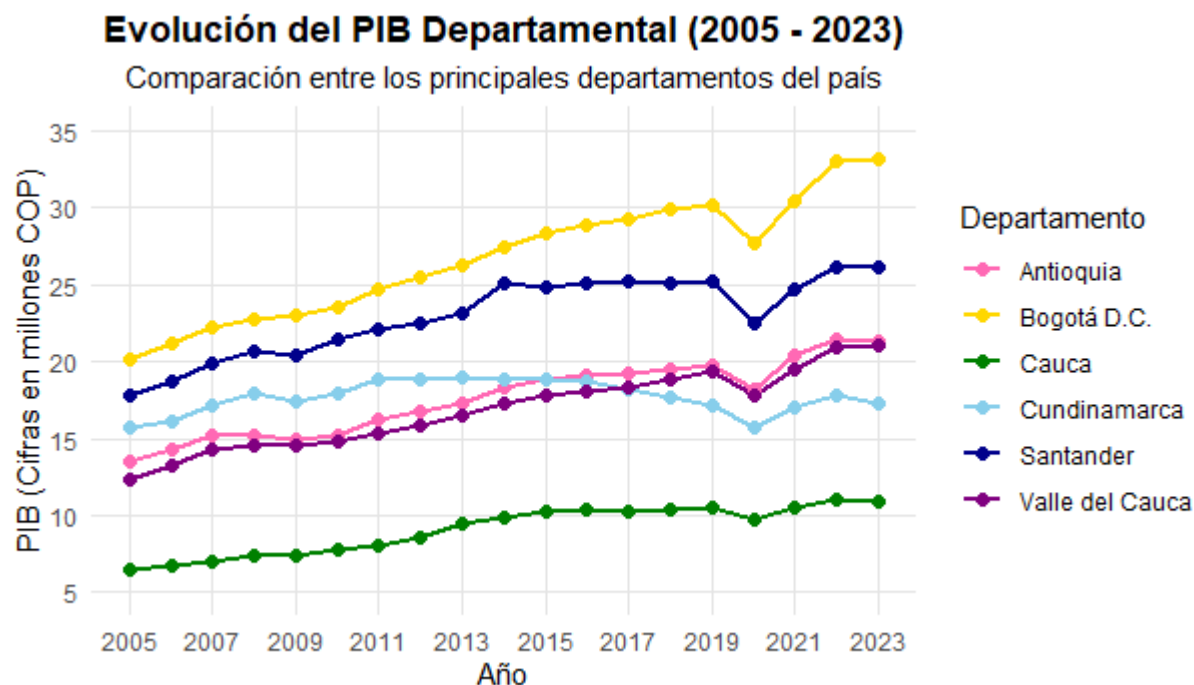
El Valle del Cauca, vecino inmediato del Cauca, es un ejemplo particularmente revelador. Aunque comparte algunos retos sociales y de seguridad, el Valle mantiene una tasa de pobreza extrema que oscila entre el 5,7% y el 8,4% en la mayor parte del periodo, y solo se ve significativamente afectada en 2020 cuando sube al 14,2%, aún muy por debajo del Cauca. Esta diferencia refuerza la idea de que el narcotráfico, en tanto estructura económica, no solo perpetúa la pobreza, sino que impide la transformación del territorio hacia modelos de desarrollo inclusivos y sostenibles.

La situación del Cauca también debe entenderse en el marco de una marginalidad geográfica e histórica que ha favorecido la consolidación de corredores del narcotráfico, particularmente en áreas como el norte del departamento y las zonas montañosas que conectan con el Pacífico. Estos territorios, estratégicos para las rutas del comercio ilegal, se convierten en escenarios de disputa armada, expulsión de comunidades y ruptura de los tejidos sociales, lo que contribuye a agravar la pobreza extrema y limitar cualquier posibilidad de progreso sostenido.

En última instancia, la evolución del indicador de pobreza extrema en el Cauca durante el periodo de 2012 al 2021 ofrece evidencia empírica de cómo las economías ilícitas, lejos de representar una solución temporal a la pobreza, consolidan estructuras de dependencia, informalidad y violencia que refuerzan la exclusión. A diferencia de otras regiones que han logrado articular políticas de reducción de pobreza con desarrollo productivo formal, el Cauca parece estar inmerso en una economía de subsistencia marcada por la ilegalidad, el conflicto armado y la ausencia de alternativas viables.

PIB por habitante del departamento del Cauca frente a los principales departamentos del país y la capital

Figura 4



Fuente: Autoría propia con datos del DANE – PIB departamental con año de referencia 2015.

El departamento del Cauca a lo largo del periodo analizado muestra un claro retraso frente a los principales departamentos del país y aún más frente a la ciudad capital. Esta tendencia, evidenciada en las cifras del PIB per cápita entre 2005 y 2023, pone de manifiesto profundas desigualdades estructurales que trascienden lo económico, como se ha mencionado, y se anclan en dinámicas sociales, históricas y, en particular, en la influencia del narcotráfico como fenómeno persistente en el suroccidente colombiano. Mientras departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca presentan un crecimiento sostenido y robusto del Producto Interno Bruto per cápita, con cifras que alcanzan y superan los 20 millones de pesos por habitante en los años recientes, el Cauca apenas supera los 10 millones para el año 2023. La magnitud de esta diferencia es abismal. Bogotá, por ejemplo, arranca en 2005 con un PIB per cápita de 20,148

millones y culmina 2023 con más de 33,106 millones, creciendo en ese período por cerca de 13 millones de pesos. El Cauca en contraste, inicia con 6,437 millones y finaliza con 10,918 millones, un aumento modesto de apenas 4,481 millones en dieciocho años. Este crecimiento, aunque positivo, resulta profundamente insuficiente cuando se lo compara con la evolución de las demás regiones, lo cual refleja no solo una débil capacidad productiva sino también una economía atrapada en lógicas de informalidad, dependencia agrícola primaria y conflictividad armada.

Las razones detrás de esta brecha estructural son múltiples, pero una de las más significativas y la que compete para esta investigación es la presencia persistente del narcotráfico en el territorio caucano. Lejos de ser simplemente un problema de seguridad, el narcotráfico ha moldeado profundamente la economía del departamento, desincentivando la inversión formal, debilitando las instituciones locales y empujando a amplios sectores de la población hacia economías ilegales. En lugar de integrarse plenamente a las cadenas de valor nacionales o internacionales, muchas comunidades del Cauca han quedado atrapadas en circuitos de producción de cultivos ilícitos como la coca, que, si bien pueden generar ingresos inmediatos, no contribuyen al crecimiento del PIB formal ni a una base productiva sostenible.

Además, el control territorial ejercido por grupos armados vinculados al narcotráfico ha tenido un efecto disuasorio sobre los proyectos productivos formales. La inseguridad, los conflictos por la tierra y la ausencia de garantías institucionales han hecho que los capitales se alejen del Cauca, profundizando su aislamiento económico. Esta situación se agrava especialmente en zonas rurales, donde el acceso a servicios básicos, infraestructura y mercados es limitado o inexistente, haciendo aún más difícil la transición hacia actividades legales y sostenibles.

Estudios como los de Steiner y Corchuelo (1999) muestran que la economía derivada del narcotráfico, además de fomentar la concentración de tierras y el contrabando, altera los patrones productivos regionales, creando entornos de alto riesgo que desincentivan la inversión lícita y perpetúan la informalidad. En lugar de estimular el desarrollo productivo, la economía ilegal genera dinámicas de exclusión, dependencia y vulnerabilidad estructural.

En esta línea, el Banco Mundial ha advertido que la expansión del crimen organizado, donde el narcotráfico es un factor preponderante, erosiona la legitimidad de las instituciones públicas, incrementa la corrupción y socava el Estado de derecho, generando un entorno de alta incertidumbre que inhibe el crecimiento económico y la generación de empleo formal (World Bank, 2023). En su informe *Violence in Colombia: Toward Peace, Partnerships and Sustainable Development*, este mismo organismo identifica al crimen organizado como una de las restricciones más severas para el desarrollo del país, al limitar la productividad y reducir la capacidad estatal para invertir en infraestructura, educación y servicios esenciales (World Bank, 2018).

A ello se suma la evidencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que en su informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos para 2019 señala que departamentos como el Cauca enfrentan serias limitaciones institucionales para erradicar cultivos ilícitos y, aún más, para implementar con éxito proyectos de desarrollo alternativo, lo cual perpetúa la dependencia de las economías ilegales (UNODC, 2020). De manera consistente, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) advierte que muchos de los esfuerzos de sustitución fracasan por la carencia de seguridad jurídica, acceso estable a mercados lícitos y mecanismos de acompañamiento continuo por parte de las autoridades locales (PNIS, 2020).

La Defensoría del Pueblo también ha documentado cómo la convergencia de economías ilegales en el Cauca, narcotráfico, minería ilegal y contrabando, no solo provoca daños ambientales y desplazamientos forzados, sino que además debilita profundamente la confianza de las comunidades en las instituciones, percibidas como cómplices o ineficaces frente al poder de los grupos armados (Defensoría del Pueblo, 2018).

Estudios recientes han demostrado, además, que los ingresos derivados del narcotráfico no logran dinamizar economías locales en términos de productividad o diversificación, sino que tienden a consolidar esquemas de exclusión, informalidad y dependencia que dificultan la integración a mercados legales y sostenibles (Sauls, Dest & McSweeney, 2022). Finalmente, investigaciones macroeconómicas han evidenciado cómo el ingreso masivo de divisas de origen ilícito en Colombia ha provocado apreciaciones del tipo de cambio real, encareciendo las exportaciones y desincentivando la inversión en sectores lícitos de alto valor agregado, generando una fuerte asimetría entre regiones como el Cauca y los principales centros económicos del país. Como lo plantea Maestre (2016), una parte significativa de la apreciación del tipo de cambio real en Colombia puede atribuirse al ingreso de capitales derivados del narcotráfico, cuyos efectos se hacen más evidentes a nivel sectorial y regional, afectando particularmente a las zonas periféricas del país.

El contraste con departamentos como Valle del Cauca, vecino geográfico inmediato, es particularmente revelador. Mientras el Valle crece con consistencia desde los 12,309 millones en 2005 hasta los 21,026 millones en 2023, impulsado por una economía diversificada, industrializada y con fuertes vínculos internacionales, el Cauca permanece estancado en una economía mayoritariamente agrícola, informal y marginalizada. Esta cercanía geográfica entre dos realidades

económicas tan dispares evidencia que no se trata únicamente de ubicación, sino de condiciones estructurales profundamente distintas y, sobre todo, de la influencia del conflicto armado y del narcotráfico como barreras al desarrollo.

Por otro lado, el crecimiento del PIB per cápita en el Cauca, aunque constante en términos absolutos, no logra mantenerse al ritmo de los departamentos líderes. Esto no solo refleja una menor productividad, sino también una incapacidad de generar nuevas fuentes de valor agregado que dinamicen la economía regional. En contextos donde el narcotráfico se convierte en la principal opción económica para comunidades empobrecidas y abandonadas por el Estado, la inversión en sectores como el turismo, la agroindustria legal, la educación técnica o la tecnología se vuelve prácticamente inviable. Esta situación se agrava por la presencia de actores armados ilegales, quienes generan un entorno de inseguridad que incrementa los costos de transacción de la producción lícita y limita gravemente la circulación de personas, insumos y productos, la implementación de programas gubernamentales, así como la participación de intermediarios en los mercados legales. Como lo destaca el informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos para 2019 de UNODC: “la seguridad tiene también un impacto profundo en los costos de transacción de la producción agropecuaria lícita. Sin esta consideración, cualquier intervención orientada a mejorar las condiciones de comercialización [...] tendrá muy bajas probabilidades de éxito” (UNODC, 2020, p. 150).

Además, la violencia asociada al narcotráfico ha tenido un impacto directo sobre el capital humano del departamento. El reclutamiento forzado, el desplazamiento interno y el asesinato de líderes sociales han socavado las bases de una sociedad que podría impulsar procesos de transformación

económica. Sin una fuerza laboral capacitada, así como segura y con acceso a oportunidades, cualquier estrategia de crecimiento económico sostenible se ve frustrada desde sus cimientos.

Es importante resaltar que esta situación no es producto exclusivo de dinámicas internas del Cauca, sino también del abandono histórico por parte del Estado central y de políticas públicas que han sido insuficientes o mal implementadas. Las cifras de PIB per cápita aquí analizadas no son meramente estadísticas, sino que también son evidencia del fracaso estructural en integrar al Cauca a un modelo de desarrollo inclusivo y equitativo.

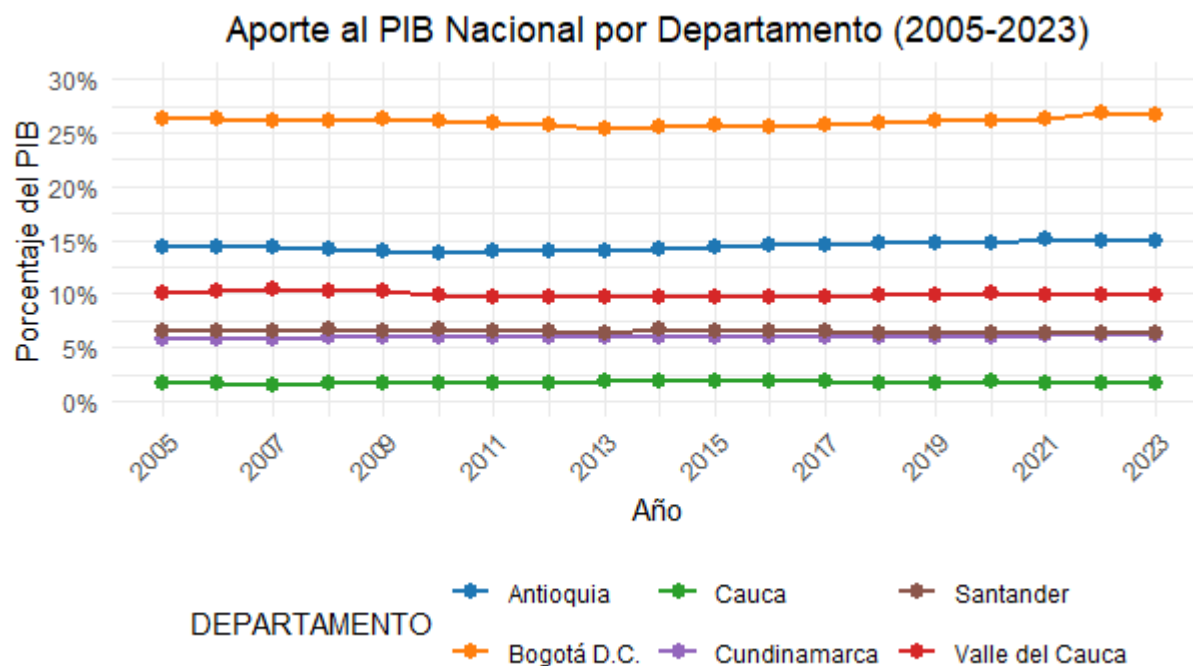
Aunque durante el periodo del 2014 al 2023 el Cauca muestra un crecimiento gradual y constante de su PIB per cápita, pasando de 9,538 millones en 2013 a 10,918 millones en 2023, esta trayectoria no logra alterar la posición estructural de rezago frente al resto de los departamentos analizados. La brecha, lejos de cerrarse, se mantiene relativamente constante e incluso puede considerarse ampliada si se observa el ritmo de crecimiento de regiones como Antioquia o la capital (Bogotá), cuyos niveles de producto por habitante alcanzan los 21,358 millones y 33,106 millones respectivamente en el último año del periodo.

Este estancamiento relativo adquiere una dimensión más profunda cuando se interpreta a la luz de los factores sociales y económicos que caracterizan al departamento del Cauca. Si bien en términos absolutos hay una expansión del PIB per cápita, este crecimiento debe ser problematizado. En primer lugar, es crucial considerar que parte de esa expansión puede estar distorsionada por economías informales y, especialmente, por la incidencia del narcotráfico como motor económico paralelo.

El narcotráfico, lejos de representar una fuente de dinamización sostenible, distorsiona la estructura económica regional, generando un entorno en el que la inversión formal se retrae, la institucionalidad se debilita y los recursos públicos son cada vez más difíciles de canalizar eficientemente hacia actividades productivas. El control territorial por parte de actores armados ilegales ligados a economías ilícitas impone costos adicionales a la actividad económica legítima con factores como la extorsión, desplazamientos forzados, inseguridad y pérdida de talento humano. Todo esto incide directamente en la productividad del Cauca, limitando su capacidad de diversificar su aparato productivo y acceder a mercados más amplios.

Participación del Cauca en el PIB de Colombia frente a los principales departamentos y la capital

Figura 5



Fuente: Autoría propia con datos del DANE – PIB departamental con año de referencia 2015.

La evolución porcentual del PIB departamental de Cauca entre 2005 y 2023 reafirma las características estructurales de un territorio atrapado en la marginalidad productiva. Durante casi dos décadas, la participación del departamento en la economía nacional ha oscilado dentro de un rango estrecho que va del 1.571 % en 2007 al 1.823 % en 2016, sin alcanzar nunca el 2 % del total nacional. Esta constancia porcentual, más que reflejar estabilidad, evidencia una profunda rigidez en la capacidad de transformación económica del departamento. A pesar de ciertas fluctuaciones anuales, la tendencia general ha sido la de un estancamiento estructural donde los leves repuntes como el de 2016, no obedecen a transformaciones significativas en la base productiva sino a coyunturas transitorias, probablemente asociadas al incremento del gasto público post acuerdo o a la expansión temporal de sectores primarios. Lo más preocupante es que el crecimiento absoluto

de la economía caucana no se ha traducido en un aumento proporcional dentro del conjunto nacional, lo que significa que el Cauca ha venido creciendo, pero lo ha hecho más lentamente que el promedio del país, profundizando así su rezago relativo frente a los departamentos más dinámicos.

Esta condición se torna más evidente al comparar su evolución con la de otros departamentos o la capital. Bogotá, por ejemplo, ha mantenido una participación constante por encima del 25 %, siendo el principal aportante al PIB nacional. En 2023, la capital alcanzó el 26.743 %, cifra que supera más de quince veces la participación del Cauca en el mismo año. Antioquia, por su parte, ha oscilado alrededor del 14 % con una tendencia ligeramente creciente, mientras que Valle del Cauca, pese a una leve disminución de su participación de 10.059 % en 2005 a 9.955 % en 2023, sigue aportando aproximadamente seis veces lo que aporta el Cauca. Incluso departamentos de tamaño medio como Santander y Cundinamarca duplican o triplican sostenidamente la participación caucana. Esta disparidad, lejos de reducirse, se ha consolidado con el tiempo, lo cual indica una falta total de convergencia regional. El Cauca no solo no cierra brechas, sino que se consolida en la periferia del modelo económico nacional.

Esta situación se agrava cuando se consideran los factores exógenos e ilegales que estructuran la economía del departamento. En efecto, buena parte del dinamismo económico del Cauca no se refleja en las cifras oficiales del PIB porque ocurre en el marco de actividades ilegales, especialmente el narcotráfico. La persistencia de cultivos de uso ilícito, particularmente en zonas del norte y la costa pacífica caucana, ha configurado una economía sumergida que reconfigura el aparato productivo sin aportar al valor agregado formal.

Para comprender cabalmente esta realidad es necesario analizarla como un ecosistema económico ilegal compuesto por múltiples elementos interdependientes. Entre estos destacan los campesinos cultivadores, los grupos armados ilegales que controlan el territorio y regulan la producción, los intermediarios de la cadena de transformación de la hoja de coca en pasta y base de cocaína, y los actores institucionales que, debilitados o cooptados, pierden capacidad de regulación. Cada uno cumple un rol dentro de esta economía paralela y sus interacciones producen efectos sistémicos que afectan tanto al aparato productivo legal como al tejido social.

En primer lugar, los campesinos, históricamente excluidos del modelo de desarrollo rural formal, han encontrado en la coca una alternativa económica rentable. En regiones como Argelia (Cauca), más del 90% de la población dependía directamente del cultivo de coca hasta hace poco, cuando una crisis sin precedentes deterioró su rentabilidad (Bravo, 2022). Esta economía campesina cocalera se sostiene gracias a conocimientos agroindustriales transmitidos localmente, que permiten incluso la transformación primaria en pasta base dentro de las mismas fincas (UNODC/SIMCI, 2006, p. 24). El acceso limitado a mercados legales, crédito formal y asistencia técnica ha perpetuado esta dependencia.

Por su parte, los grupos armados ilegales actúan como gestores y reguladores de esta economía. En el caso de Argelia, la disidencia "Carlos Patiño" controla buena parte del territorio y ha instaurado un sistema tributario ilegal que grava cada eslabón de la producción, desde el productor con mil pesos por arroba hasta el raspachín, pasando incluso por transacciones inmobiliarias (Bravo, 2022). Este control territorial no sólo garantiza su financiamiento, sino que también impone reglas de movilidad, genera enfrentamientos armados y limita el tránsito de personas y bienes.

Los intermediarios de la cadena productiva como químicos, transportistas y cocineros completan esta especie de circuito económico. Son quienes adquieren la hoja, procesan la pasta y la movilizan hacia mercados más rentables. Sin embargo, la fragmentación territorial y la ausencia de un control hegemónico tras la salida de las FARC han afectado la estabilidad de este mercado. Las disputas entre disidencias como “Carlos Patiño” y la “Segunda Marquetalia”, y la desconfianza de los grandes compradores, han provocado una caída sostenida en los precios de la hoja de coca, que llegó a valer apenas 35 mil pesos por arroba en 2022, cuando en temporadas anteriores alcanzaba hasta 70 mil pesos (Bravo, 2022).

El Estado, debilitado en sus capacidades institucionales, enfrenta serias dificultades para intervenir eficazmente. La violencia derivada del conflicto impide la presencia continua de autoridades civiles y militares, mientras que la corrupción o la connivencia con redes ilegales en algunos niveles contribuyen a la ineficacia del control. Según el informe de UNODC (2006), aproximadamente el 66% de los productores transforman su hoja en pasta o base dentro de sus propios predios, lo que refleja el vacío de autoridad y la naturalización del narcotráfico como actividad económica (p. 25).

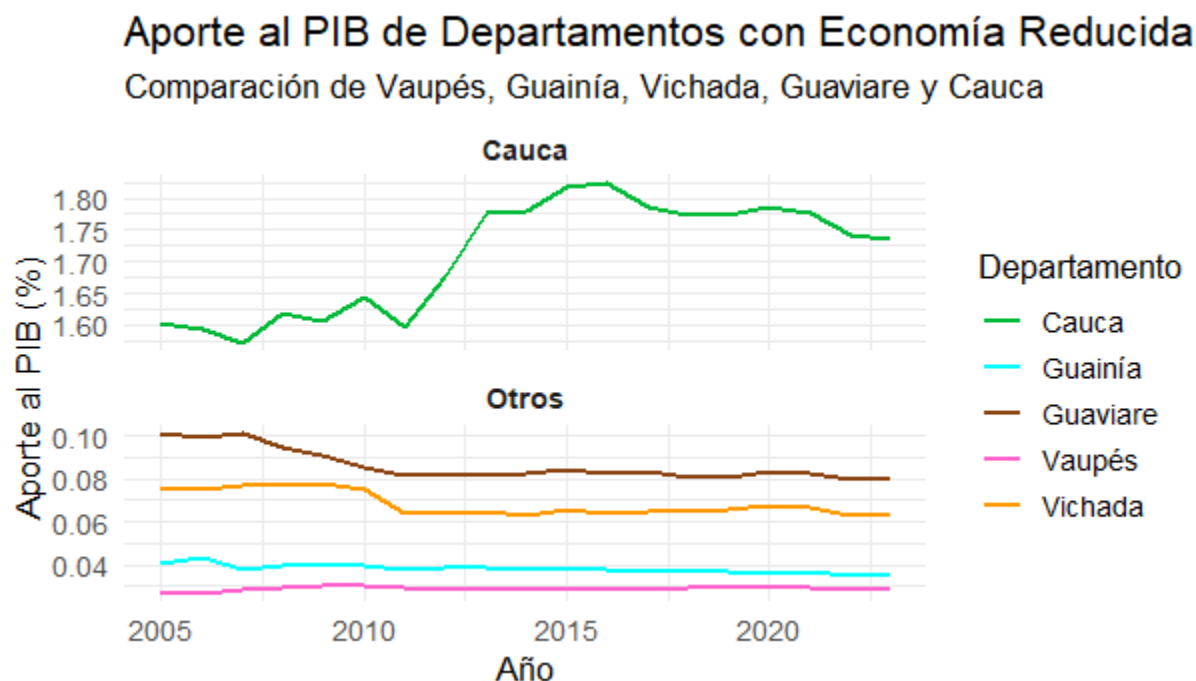
Los efectos de esta economía paralela son múltiples. En términos económicos, distorsiona los precios relativos, desincentiva la inversión en sectores productivos legales y erosiona los mercados locales. La inflación de los insumos agrícolas, atribuida en parte al conflicto internacional y a la dependencia de agroquímicos importados, agrava la situación (Bravo, 2022). Además, la fragmentación del mercado ha afectado incluso la circulación del efectivo, al punto que el comercio local se ha reducido hasta en un 80% en días de mercado en Argelia.

En el plano social, la violencia vinculada al narcotráfico perpetúa el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y la fragmentación del tejido comunitario. La movilidad de bienes, personas y capitales se ve restringida por el miedo, las fronteras invisibles y los controles de actores armados, lo que reduce la productividad agregada y el potencial de integración regional.

En este sentido, el narcotráfico opera como un mecanismo de bloqueo al desarrollo, generando una paradoja en la cual puede haber circulación de dinero y ciertos signos de consumo sin que ello se traduzca en acumulación de capital ni en mejora de los indicadores de productividad o formalización. Esta paradoja explica por qué el Cauca muestra cierta estabilidad o incluso crecimiento en términos absolutos de su PIB, pero una incapacidad estructural para aumentar su participación relativa en la economía nacional. En suma, la baja y constante participación porcentual del Cauca en el PIB entre 2005 y 2023 no es el resultado de una dinámica económica débil, sino de una estructura territorial profundamente condicionada por la ilegalidad, la baja productividad, la debilidad institucional y la exclusión histórica. Esta combinación de factores impide que el departamento aproveche sus ventajas geográficas, biodiversas y culturales, y lo mantiene atrapado en una trampa de pobreza de la que no podrá salir sin una reconfiguración profunda del orden político, económico y territorial vigente.

Participación del Cauca en el PIB de Colombia frente a departamentos con economías reducidas y problemáticas sociales similares.

Figura 6



Fuente: Autoría propia con datos del DANE – PIB departamental con año de referencia 2015.

Aunque el Cauca presenta una participación porcentual al PIB nacional muy por encima de departamentos como Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, su posición en el entramado económico colombiano sigue siendo ambigua y profundamente condicionada por factores estructurales ligados a la informalidad, la ilegalidad y la violencia perpetuada por el narcotráfico. Entre 2005 y 2023, su aporte osciló entre el 1.571 % y el 1.823 %, manteniéndose siempre por debajo del 2 %, lo que evidencia un techo de cristal que el departamento no ha logrado superar pese a su diversidad productiva potencial. Cuando se compara con los cinco departamentos de menor aporte al PIB nacional, todos por debajo del 0.1 %, la diferencia parece abismal, pero en

realidad esta distancia no representa un liderazgo claro del Cauca, sino apenas su anclaje a una marginalidad productiva algo menos profunda.

El caso de Guainía, cuyo aporte al PIB nacional ha oscilado entre el 0.038 % y el 0.043 %, o el de Vaupés, que no supera el 0.03 % en ningún año del periodo analizado, ilustra economías en condiciones de subsistencia, con escasa presencia estatal y un aislamiento geográfico que limita cualquier impulso económico. No obstante, el hecho de que el Cauca, con una población mucho mayor, mejor ubicación geográfica y potencial agroindustrial significativo, no logre despegar con fuerza en términos relativos frente a estos departamentos, obliga a una reflexión más crítica sobre los factores que frenan su desarrollo.

Guaviare y Vichada, aunque superan en algunos momentos a Guainía y Vaupés, también se encuentran en una posición de estancamiento estructural, con participaciones entre el 0.06 % y el 0.10 % del PIB nacional. Estos departamentos comparten con el Cauca una problemática social compleja atravesada por la presencia histórica de cultivos de uso ilícito, economías informales e instituciones debilitadas. Sin embargo, mientras en ellos la incidencia del narcotráfico configura una economía paralela que subsiste en la sombra del abandono estatal, en Cauca el narcotráfico se ha convertido en el principal eje estructurador de una economía híbrida que distorsiona los procesos de acumulación, formalización y crecimiento sostenido.

A diferencia de los departamentos amazónicos, donde las condiciones naturales imponen limitaciones evidentes al desarrollo económico, en el Cauca las limitaciones son impuestas por un modelo de economía ilícita profundamente enraizado. La trampa de pobreza en la que se encuentra el departamento no es simplemente el resultado de una falta de inversión o de conectividad, sino la consecuencia de un sistema económico donde los incentivos están moldeados por la rentabilidad

del narcotráfico y no por la lógica del desarrollo sostenible. El predominio de actividades como el cultivo de coca, el procesamiento artesanal de pasta base y la intermediación de rutas ilegales genera una dinámica económica en la que buena parte del capital circulante no se traduce en mayor PIB, sino en concentración de ingresos, aumento de la violencia y debilitamiento institucional.

Así mismo, mientras el Cauca supera por mucho a departamentos como Guainía o Vaupés en términos absolutos y relativos, su dinámica interna se asemeja a la de estos territorios en cuanto a la captura del aparato económico por redes ilegales y la ausencia de un Estado capaz de direccionar la inversión hacia actividades lícitas y sostenibles. El narcotráfico impone su lógica sobre los territorios al definir qué se produce, cómo se produce y quién se beneficia. Bajo esta lógica, el aparato productivo legal es subyugado por una economía informal e ilegal que alimenta la violencia, desplaza a la inversión privada y genera una cultura económica centrada en la inmediatez, la informalidad y la precariedad como se ha mencionado antes.

El hecho de que el Cauca no logre elevar su participación porcentual al PIB nacional a pesar de sus ventajas relativas y su crecimiento poblacional, indica que su aparato económico está estancado en una fase extractiva y primaria, con baja capacidad de transformación productiva. La paradoja es clara, en el Cauca circula dinero, pero no se acumula capital; existe actividad económica, pero no se traduce en productividad ni en crecimiento estructural. Mientras los departamentos más desarrollados del país diversifican sus economías hacia sectores de alto valor agregado como la industria, la tecnología o los servicios financieros, el Cauca permanece anclado a una matriz productiva dominada por la agricultura de subsistencia, la economía cocalera y el comercio informal.

En definitiva, aunque el Cauca se mantiene por encima de los departamentos más rezagados del país, esa diferencia no debe interpretarse como una señal de fortaleza, sino como la expresión de un estancamiento moderado en un contexto de debilidad generalizada. El departamento se encuentra atrapado en una trampa de pobreza donde el narcotráfico actúa como motor económico, pero también como freno al desarrollo, impidiendo la consolidación de un sistema productivo legal, inclusivo y sostenible. Sin una intervención decidida del Estado que transforme la economía ilegal en oportunidades legales, que fortalezca las instituciones locales y que apueste por una infraestructura orientada al desarrollo humano y productivo, el Cauca seguirá ocupando una posición marginal en el concierto económico nacional, lejos de las regiones líderes y peligrosamente cerca de los territorios más excluidos y fragmentados del país.

Ahora, después de hacer un análisis comparativo que puso en perspectiva el comportamiento del departamento del Cauca en relación con el panorama general del país, sus principales departamentos y la ciudad capital, es momento de enfocar nuestra atención en una visión más detallada del territorio. Al revisar diferentes informes de organizaciones clave en el desarrollo estructural del Cauca, hemos podido identificar varios aspectos fundamentales. Estos elementos nos permiten comprender mejor la relación entre las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y las dinámicas sociales y económicas que ocurren en el departamento, evidenciando de manera clara cómo estas prácticas afectan su estructura y la calidad de vida de sus habitantes.

Exclusión territorial, pobreza estructural y condiciones de vulnerabilidad

La pobreza, la desigualdad y la exclusión son condiciones estructurales en el departamento del Cauca que han facilitado la convergencia de economías ilegales como el narcotráfico. La ruralidad extrema y la poca presencia del Estado son factores comunes en los municipios con mayor participación en cultivos ilícitos.

Según el informe de líneas base del Observatorio de Drogas de Colombia, muchos municipios con altos niveles de ruralidad como Argelia, Piendamó, Timbiquí o Santa Rosa, alcanzan niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) superiores al 70%. Esta situación se reafirma en el “Estudio de insuficiencia y limitaciones 2023”, donde se registra que Guapi con un 70,6%, López de Micay con un 68,5% y Timbiquí con un 70,6%, presentan índices críticos de pobreza extrema, dependencia económica y hacinamiento.

Debido a la limitada cobertura educativa, la falta de acceso a servicios básicos y la precaria infraestructura, gran parte de la población, en particular los jóvenes, ve en los ilícitos una fuente viable de sustento. A esto se suma la falta de presencia institucional y la debilidad histórica de los mecanismos de protección social y desarrollo rural.

Educación, abandono escolar, retracción y pérdida de oportunidades

Entre 2010 y 2015, el departamento del Cauca registró más de 22.800 casos de deserción escolar, concentrados principalmente en zonas rurales (Ministerio de Educación Nacional, 2020). Este fenómeno se asocia con condiciones estructurales como la pobreza, el desplazamiento forzado y la presencia de actores armados. Por ejemplo, en 2012 se identificaron 8.598 casos de deserción, de los cuales el 77 % ocurrieron en zonas rurales. Según Narváez y Gómez (2023), en contextos marcados por la vulnerabilidad socioeconómica, los factores más recurrentes en el abandono escolar incluyen la necesidad de contribuir al ingreso familiar, embarazos no deseados y la exposición a dinámicas de violencia. Estas condiciones están presentes en numerosos municipios del Cauca con alta ruralidad y débil cobertura institucional, donde las economías ilegales ofrecen alternativas inmediatas de ingreso para jóvenes en edad escolar.

En el año 2021, la tasa de deserción en secundaria alcanzó el 4,66%, lo que representa un aumento del 107% respecto a 2020 que tenía un 2,25%. Este fenómeno se agudiza en adolescentes mayores

de 12 años, quienes son los principales objetivos de cooptación por parte de estructuras narcotraficantes.

Estudios académicos como el de Sánchez y Rodríguez (2010) sostienen que “el conflicto armado tiene efectos en la educación no solo de corto sino de largo plazo”, generando rezagos en el desarrollo social y productivo de las regiones donde se perpetúa.

Salud pública, niñez y deterioro comunitario

Entre 2010 y 2020, el departamento del Cauca enfrentó desafíos significativos en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015, la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años fue del 13,2%, superando el promedio nacional del 10,8%. Esta situación se agrava en zonas rurales donde la limitada presencia institucional y las condiciones socioeconómicas precarias coinciden con la presencia de economías ilegales. Aunque no se establece una relación causal directa entre la desnutrición infantil y el narcotráfico, la superposición de estas problemáticas en los mismos territorios evidencia un entorno de vulnerabilidad estructural que compromete el bienestar infantil. Los embarazos en adolescentes también mostraron una recurrencia durante ese periodo, al igual que los casos de violencia entre menores. Adicionalmente, se observó un aumento en los exámenes médico-legales por abuso sexual infantil, lo cual constituye un indicador del colapso institucional y de la normalización de dinámicas violentas en zonas con influencia de actores armados y economías ilegales.

A pesar de los esfuerzos institucionales por garantizar la adherencia al sistema de salud, persiste una brecha considerable en el acceso a servicios preventivos, psicológicos e integrales en las zonas rurales caucanas, lo que perpetúa condiciones de exclusión y deterioro social.

Ilícitos y violencia armada, sus efectos críticos

El narcotráfico en la región caucana está ligado a una geografía violenta que incluye desplazamientos forzados, cultivos de ilícitos, violaciones, retaliaciones y confrontaciones armadas. El departamento registra la presencia histórica de estructuras como los frentes 6, 8, 29 y 60 de las FARC, así como de grupos residuales, el ELN, disidencias y bandas criminales como los Rastrojos.

Estos actores se han disputado corredores estratégicos para el tráfico de drogas hacia el Pacífico, creando un entorno persistentemente inestable. Las consecuencias han sido numerosas, desde asesinatos selectivos hasta restricciones a la movilidad de comunidades escolares, líderes sociales y empleados públicos.

«La cadena de producción de estupefacientes está articulada a otras actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas», según consta en el Plan Departamental de Drogas del Cauca desde 2014.

Adolescencia, niñez y reclutamiento forzado

Uno de los efectos más devastadores del narcotráfico ha sido el reclutamiento sistemático de menores de edad por parte de los actores armados ilegales. Estos menores no solo son utilizados como combatientes, sino también como transportadores, informantes o trabajadores en los cultivos de coca.

El impacto es tan profundo que el informe de rendición de cuentas 2023 señala que los adolescentes están expuestos a múltiples violaciones simultáneas: deserción escolar, violencia sexual, trabajos peligrosos y pérdida de proyectos de vida.

A pesar de los importantes retos que plantea el Narcotráfico en la región caucana, las entidades territoriales han propuesto estrategias para enfrentar su impacto, particularmente a través de planes sectoriales en educación, salud y prevención del consumo de drogas. Sin embargo, la magnitud del fenómeno y la capacidad real de intervención del Estado en zonas fuertemente impactadas por el crimen y la violencia han limitado estos esfuerzos.

El Departamento de Drogas del Cauca 2014-2015 formuló una propuesta integral centrada en cinco objetivos estratégicos: prevención, tratamiento, control de la oferta, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. El informe reconoce que «la narcoeconomía ha permeado todos los niveles sociales del departamento», afectando el empleo, la cultura, el medio ambiente y la convivencia (Gobernación del Cauca, 2014).

Sin embargo, existen retos para la implementación efectiva de estas estrategias, incluyendo la fragmentación institucional, la falta de coordinación entre los niveles gubernamentales, los riesgos para la seguridad de los trabajadores y las amenazas directas contra las comunidades que intentan sustituir los cultivos ilícitos.

Adicionalmente, en zonas como Argelia, López de Micay o El Tambo, la falta de conectividad física y digital combinada con la falta de recursos humanos ha dificultado la consolidación de proyectos de desarrollo rural sostenible que ofrezcan alternativas viables a la economía ilícita.

Igualdad étnica y territorial, los pueblos indígenas y afrodescendientes

El impacto del narcotráfico no ha sido uniforme. Por su ubicación geográfica y exclusión histórica del Estado, las comunidades indígenas y afrodescendientes del Cauca han sido particularmente vulnerables. Según datos del Estudio de Insuficiencia, el 60% de la población

indígena caucana vive en zonas rurales dispersas, frecuentemente en zonas de difícil acceso, sin acceso a servicios continuos de salud, transporte educativo o vías de comunicación.

Los pueblos indígenas, especialmente los Nasa, Misak, Yanacona y Coconuco, se enfrentan a varios riesgos, incluyendo la reubicación forzada, la destrucción de sus prácticas agrícolas tradicionales y la violación de su autonomía por parte de actores ilegales que imponen leyes de producción y control relacionadas con los narcóticos. Esto ha llevado a una ruptura del tejido cultural y comunitario, afectando sus sistemas propios de justicia, salud y educación.

El Informe del Censo 2020-2023 confirma que se han identificado impactos significativos sobre los niños, niñas y adolescentes indígenas, entre los que se encuentran el abandono escolar, la violencia sexual, el embarazo adolescente y el consumo de sustancias psicoactivas en situaciones de presión territorial por parte de grupos ilegales (Gobernación del Cauca, 2023).

Consumo y prevención de sustancias psicoactivas y sus retos emergentes

Aunque históricamente el Cauca ha sido más conocido por su producción que por el consumo de sustancias, en los últimos años se ha observado un aumento del consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes, particularmente en zonas urbanas como Popayán o Santander de Quilichao. El informe de implementación del Plan de Drogas señala que se han realizado esfuerzos para prevenir el consumo de drogas, brindar atención en salud mental e implementar programas comunitarios para disminuir el estigma, pero el acceso a servicios especializados aún se anticipa fuera de las zonas urbanas.

La Secretaría de Salud Departamental reporta que en 2021 se logró intervenir a 310 de los 1.200 jóvenes en riesgo por consumo de SPA en zonas priorizadas. No obstante, la cobertura sigue siendo

baja frente al universo de población expuesta. En áreas rurales, además, la detección temprana es escasa, y muchas veces las familias enfrentan barreras culturales, económicas o geográficas para buscar apoyo institucional.

Medio ambiente y sostenibilidad, el impacto de los cultivos ilícitos

En el Cauca, el narcotráfico ha dejado un profundo y silencioso legado ambiental. El crecimiento de los cultivos ilícitos ha provocado la destrucción de los bosques nativos, el uso extensivo y no regulado de pesticidas, el agotamiento de los recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad.

Según el artículo académico de Méndez et al. (2022), las regiones costeras del Cauca están rodeadas de zonas de alta sensibilidad ecológica, como el Macizo Colombiano o el Parque Nacional Natural Munchique. La pérdida de cobertura vegetal, el desplazamiento de la fauna silvestre y la contaminación de suelos y aguas han sido causados por la contaminación del aire inducida por el glifosato, el monocultivo intenso de coca y la infraestructura encubierta para laboratorios de procesamiento de base de coca.

A su vez, la sustitución de cultivos ilícitos por actividades productivas sostenibles se ha visto obstaculizada por la inseguridad y la falta de incentivos técnicos y financieros para los campesinos. Las zonas más afectadas, paradójicamente, son las más ricas en recursos naturales.

Deforestación asociada a los cultivos ilícitos

Según el informe más reciente del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 se registraron 64.990 hectáreas de cultivos de coca en Nariño, 50.343 en Putumayo y 31.844 en el Cauca, ubicando a este último como el tercer departamento con mayor presencia de cultivos ilícitos

en Colombia. Esta expansión está estrechamente vinculada con procesos de deforestación, especialmente en zonas de alta biodiversidad como el Macizo Colombiano y el Parque Nacional Natural Munchique. Aunque no existe una tasa oficial única, diversas investigaciones estiman que por cada hectárea de coca sembrada se deforestan entre 1,4 y 1,5 hectáreas de bosque, lo que implicaría una pérdida aproximada de 46.000 hectáreas en el Cauca solo en 2023. Estas dinámicas han sido ampliamente documentadas por la UNODC, que señala que el 31% de la deforestación nacional en años recientes se ha asociado directamente a cultivos de coca, especialmente en regiones como Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Así, el uso del indicador de deforestación asociada a cultivos ilícitos permite evidenciar cómo el narcotráfico no solo impacta la seguridad y el tejido social, sino que también constituye un motor clave de degradación ambiental en el suroccidente colombiano.

Infancia, adolescencia y narcotráfico

El impacto del Narcotráfico en los jóvenes es especialmente preocupante. La existencia de economías ilegales combinada con la debilidad institucional ha creado un ambiente en el que los derechos fundamentales de los niños y adolescentes son violados sistemáticamente. Según la Rendición de Cuentas 2020-2023, del total de la población del departamento (1.528.076 habitantes), el 26,13% son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mientras que el 22,07% son jóvenes entre 14 y 28 años. Este grupo poblacional representa más del 48% del total y es, previsiblemente, el más vulnerable al conflicto, la protección y la reconciliación.

La tasa de abandono escolar aumentó significativamente entre 2020 y 2022, al pasar de 2,71 por ciento a 4,46 por ciento, mientras que la tasa de fecundidad adolescente de 15 a 19 años se incrementó a 2,44 por ciento, medida que refleja condiciones de exclusión y falta de atención

integral. Esta realidad se hace sentir en las zonas rurales donde el conflicto armado, la agricultura ilegal y la ausencia del Estado han debilitado las redes familiares y comunitarias.

Adicionalmente, durante el periodo de análisis aumentaron las tasas de violencia sexual infantil y violencia intrafamiliar. En 2021, el 74,35% de los niños y niñas de 6 a 11 años reportaron haber sufrido violencia, frente al 28,18% en su primera infancia. Las cifras también revelan que el 33% de los niños menores de 5 años fueron víctimas de violencia intrafamiliar.

Estos datos muestran cómo el entorno generado por el narcotráfico afecta no solo a la economía y la seguridad, sino que destruye el tejido social y vulnera el desarrollo físico, emocional y psicológico de los menores.

Salud infantil y narcotráfico, un retroceso en el bienestar básico

La situación del Cauca también es crítica en materia de salud, especialmente para niños, niñas y mujeres en edad reproductiva. Según el DANE (2021), en 2020 la tasa de mortalidad materna fue de 61,56 por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que la cobertura de vacunación BCG contra la tuberculosis fue del 75% en 2020 y del 78% en 2021. Estas cifras evidencian la precariedad de los servicios de salud pública en zonas rurales. Más allá de los indicadores sanitarios, la salud infantil se ha visto fuertemente afectada por formas de violencia estructural como el abuso sexual. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2023), la violencia sexual contra menores ha sido una de las expresiones más recurrentes y silenciadas en territorios con débil presencia institucional. La falta de atención psicosocial y salud mental en estas zonas perpetúa la vulneración de derechos fundamentales de la niñez. Este panorama se agrava en contextos donde las economías ilegales, especialmente el narcotráfico, ejercen control territorial y sustituyen funciones estatales. En municipios como Guapi, Timbiquí y López de Micay —altamente

afectados por cultivos ilícitos—, el acceso a servicios de salud depende casi exclusivamente de vías fluviales, ya que las rutas terrestres son inexistentes. En escenarios de crisis, como desplazamientos forzados o enfrentamientos armados vinculados al control del narcotráfico, las comunidades quedan completamente aisladas. Estas condiciones, sumadas a la pobreza extrema, el desempleo, la informalidad y la ausencia del Estado, agravan problemas como la desnutrición infantil, el embarazo adolescente y la mortalidad por enfermedades prevenibles.

Fragilidad institucional frente al narcotráfico y las debilidades de la respuesta estatal

Uno de los aspectos más visibles en los documentos es la debilidad estructural del Estado en el Cauca, especialmente en sus zonas rurales. Esta fragilidad ha sido aprovechada por redes del narcotráfico para consolidar un orden paralelo basado en el miedo, el control económico y la impunidad.

El Estudio de Insuficiencia y Limitaciones Educativas 2023 destaca cómo la Secretaría de Educación enfrenta dificultades extremas para garantizar el derecho a la educación en al menos 41 municipios no certificados. Factores como la dispersión geográfica, la falta de infraestructura, la ausencia de vías de comunicación y la violencia han impedido la contratación oportuna de personal docente y el despliegue de modelos flexibles interculturales.

En este sentido, el informe señala que la tasa neta de cobertura en educación rural es inferior al 70% y que muchos estudiantes no pueden matricularse o permanecer en el sistema educativo por cuestiones de seguridad o distancia. Aunque se implementa transporte escolar, alimentación escolar y actividades complementarias, su impacto se ve limitado por la complejidad territorial y los problemas de gobernabilidad.

Por otro lado, el Informe 2021 de UNODC sobre Ilícitos Cultivos identifica al Cauca como uno de los tres departamentos con mayor área aparente de cocaína en Colombia, demostrando que la erradicación manual ha sido inadecuada y que los esfuerzos de sustitución voluntaria se han visto frustrados por amenazas, infracciones institucionales y ataques a líderes comunitarios.

Hallazgos, conclusiones y recomendaciones

Implicaciones de los hallazgos

Los resultados del análisis sugieren que las soluciones a las problemáticas del Cauca no pueden centrarse exclusivamente en la erradicación del narcotráfico, sino que deben considerar las condiciones estructurales que permiten su sostenibilidad. La presencia simultánea de pobreza, informalidad, aislamiento territorial y control por parte de actores armados ilegales indica que cualquier política pública debe integrar estrategias multisectoriales que fortalezcan la presencia estatal, reduzcan la vulnerabilidad social y restituyan derechos colectivos en zonas históricamente marginadas.

Desde una perspectiva económica, las implicaciones son particularmente preocupantes: la informalidad laboral, el bajo valor agregado en las actividades productivas y la dependencia de economías ilegales disminuyen la competitividad regional. Esto limita las posibilidades de empleo formal y sostenido, acentuando las brechas territoriales y consolidando una estructura económica excluyente.

En lo social, la reproducción de problemáticas como la desnutrición infantil, la deserción escolar y la violencia de género en territorios con cultivos ilícitos evidencia un entorno de vulnerabilidad estructural que compromete los derechos fundamentales de las comunidades. Las dinámicas del

narcotráfico refuerzan patrones de violencia e impiden el acceso equitativo a la salud, la educación y el bienestar.

Finalmente, a nivel institucional, la evidencia pone en cuestión las políticas de seguridad centradas exclusivamente en el combate a la oferta de drogas. El narcotráfico opera como parte de un entramado socioeconómico más amplio, en el que muchas comunidades participan por falta de alternativas legítimas de ingreso. Mientras persista la fragmentación en la respuesta del Estado y la falta de continuidad en las estrategias públicas, será difícil desarticular el poder económico y social de las economías ilegales en el departamento.

Hallazgos principales

Durante el periodo 2010-2020, el departamento del Cauca ha experimentado una transformación estructural impulsada por la persistencia del narcotráfico como economía predominante en extensas zonas rurales. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que los cultivos ilícitos, particularmente de coca, se han mantenido e incluso incrementado en áreas con débil presencia estatal, afectando negativamente las dinámicas económicas formales, el empleo productivo y la seguridad territorial.

En términos económicos, aunque el PIB del Cauca mostró un crecimiento promedio modesto, este no se tradujo en mejoras sustanciales en el bienestar de la población. Persisten altos niveles de pobreza, informalidad laboral e inequidad regional. La distorsión en los incentivos productivos causada por las rentas del narcotráfico ha desplazado actividades agrícolas lícitas y debilitado procesos de desarrollo rural sostenible.

A nivel social, se identificó una fuerte correlación entre la presencia de economías ilegales y fenómenos como el aumento de la deserción escolar, los embarazos adolescentes, la desnutrición crónica infantil y la violencia de género, especialmente en municipios con mayor concentración de cultivos ilícitos. La limitada infraestructura de salud y educación, sumada al control territorial por actores armados ilegales, ha perpetuado condiciones de exclusión territorial.

Desde una perspectiva institucional, se evidenció una baja capacidad de respuesta del Estado para implementar políticas públicas integrales. A pesar de algunos esfuerzos como el PNIS, su implementación ha sido parcial y poco sostenida. La débil articulación entre niveles de gobierno y la fragmentación de estrategias han impedido que los recursos estatales logren contrarrestar eficazmente el arraigo del narcotráfico en la región.

Conclusiones

El presente trabajo concluye que el narcotráfico en el departamento del Cauca entre 2010 y 2020 ha tenido repercusiones profundas y multidimensionales en la estructura económica, social e institucional del territorio. Lejos de ser un fenómeno aislado, el narcotráfico se inserta en una red compleja de relaciones que afecta el desarrollo regional, perpetúa la exclusión territorial y limita las oportunidades de vida digna para amplios sectores de la población.

Desde el punto de vista económico, el narcotráfico ha distorsionado los incentivos productivos rurales, debilitando las economías legales e impactando negativamente indicadores como el empleo formal, el valor agregado agrícola y la inversión en infraestructura productiva. Aunque el PIB departamental evidenció cierta estabilidad, dicha tendencia no logró traducirse en mejoras significativas en el bienestar de la población, especialmente en las zonas rurales.

En lo social, la expansión de economías ilegales ha coincidido con altos niveles de pobreza, deserción escolar, embarazos adolescentes, violencia de género, inseguridad alimentaria y brechas en el acceso a salud y educación. La violencia asociada al control territorial por grupos armados ilegales ha reforzado dinámicas de exclusión, debilitando el tejido comunitario y generando desplazamientos forzados.

Finalmente, en el plano institucional, el trabajo demuestra que la débil presencia del Estado, la fragmentación de políticas públicas y la limitada capacidad de implementación han sido factores determinantes en la persistencia del narcotráfico. Las respuestas centradas exclusivamente en la erradicación forzada o la represión no han generado resultados sostenibles. El desarrollo integral del Cauca requiere una estrategia territorial, articulada y sostenida, que reconozca las múltiples dimensiones del problema y priorice la restitución de derechos, la construcción de confianza institucional y la inversión estructural en el bienestar de las comunidades más afectadas.

Recomendaciones

A partir del análisis realizado, se proponen las siguientes recomendaciones para avanzar en una estrategia integral y sostenible frente al impacto del narcotráfico en el departamento del Cauca:

1. Reforzar la presencia institucional en zonas rurales mediante el fortalecimiento de la infraestructura de salud, educación, justicia y transporte, con enfoque diferencial y de derechos. La garantía de servicios básicos es un requisito previo para el desarrollo alternativo.

2. Impulsar políticas productivas rurales que fomenten la sustitución de cultivos ilícitos por medio de incentivos sostenidos, asistencia técnica, acceso al crédito, comercialización garantizada y seguridad jurídica para pequeños productores.
3. Diseñar programas de empleo y formación técnica para jóvenes y mujeres rurales, orientados a la diversificación productiva y la generación de ingresos legales que disminuyan la dependencia económica de actividades ilícitas.
4. Articular las estrategias de seguridad con políticas sociales y económicas, priorizando la protección de líderes sociales y comunidades vulnerables. La represión sin inversión social puede aumentar el conflicto y la desconfianza institucional.
5. Fortalecer la coordinación interinstitucional y multinivel entre gobierno nacional, departamental y local para garantizar la implementación coherente y eficaz de políticas públicas, evitando la fragmentación y la duplicidad de esfuerzos.
6. Monitorear y evaluar permanentemente los programas de sustitución y desarrollo alternativo, garantizando mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas para ajustar las intervenciones según los contextos territoriales.
7. Fomentar la educación crítica y la cultura de legalidad en escuelas y espacios comunitarios, con campañas pedagógicas que reconozcan las consecuencias del narcotráfico y promuevan proyectos de vida alejados de la violencia y la ilegalidad.

Estas recomendaciones buscan contribuir a una visión de largo plazo, centrada en el desarrollo humano, la equidad territorial y la construcción de paz en el departamento del Cauca.

Referencias bibliográficas

Bravo, N. (2022). *El pueblo del Cauca donde el conflicto es tan intenso que la coca ya no da plata*. La Silla Vacía. <https://lasillavacia.com>

CEPAL. (2021). *Estudios de economía territorial*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Comisión de la Verdad. (2022). *Informe final: Hallazgos y recomendaciones*. <https://comisiondelaverdad.co/>

DANE. (2016). *Boletín técnico: informalidad laboral en Colombia*. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DANE. (2021). *Estadísticas vitales - Defunciones y nacimientos*. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/estadisticas-vitales>

Defensoría del Pueblo. (2018). *Informe especial de riesgo: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo*. Bogotá D.C., Colombia.

Defensoría del Pueblo. (2023). *Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Colombia*. <https://repositorio.defensoria.gov.co/items/ac8c9fff-c83d-4e07-abe4-cd96b58388e3>

Díaz, M. (2020). *Institucionalidad y narcotráfico en zonas rurales*. Fundación para el Desarrollo Local.

El País. (2024, 18 de octubre). *Colombia bate su récord de cultivos de coca por tercer año consecutivo, con 253.000 hectáreas en 2023*. <https://elpais.com/america-colombia/2024-10-18/colombia-bate-su-record-de-cultivos-de-coca-por-tercer-ano-con-25300-hectareas-en-2023.html>

García, A. (2022). *Impacto del narcotráfico en la agricultura del Cauca*. Revista de Estudios Regionales.

Gobernación del Cauca. (2023). *Rendición de cuentas 2020-2023*. Secretaría de Planeación Departamental.

Gómez, J. (2022). *Violencia y control territorial en el suroeste colombiano*. Instituto de Estudios Políticos.

Insight Crime. (2024). *Crime limits growth in Latin America, says World Bank*. InsightCrime. <https://insightcrime.org/news/crime-limits-growth-latin-america-says-world-bank/>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2015). *Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015*. <https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional>

INDEPAZ. (2020). *Boletín de seguimiento a economías ilegales y conflicto armado*. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

Maestre, D. (2016). *Repercusiones económicas e institucionales del narcotráfico en Colombia*. https://www.academia.edu/29887316/REPERCUSIONES_ECON%C3%93MICAS_E_INSTITUCIONALES_DEL_NARCOTR%C3%81FICO_EN_COLOMBIA

Martínez, L., & Ríos, F. (2021). *Economías ilícitas y violencia en el suroccidente colombiano*. Universidad del Valle.

Méndez, S., Rodríguez, L., & Rivera, T. (2022). *Glifosato, ecosistemas y conflicto en el Cauca*. Universidad Nacional de Colombia.

Ministerio de Educación Nacional. (2020). *Datos abiertos MEN - Estadísticas del sector educativo*. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/estadisticas/datos-abiertos-men/>

Narváez, J. L., & Gómez, E. (2023). Factores asociados con la deserción escolar en una institución educativa pública en Cartagena (Colombia). *Panorama Económico*, 31(1), 113–132. <https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/4707>

Observatorio de Asuntos de la Mujer del Cauca. (2022). *Informe anual de condiciones sociales y violencia de género*.

Ramos, L., & Pérez, F. (2021). *Inversión y desarrollo en zonas de conflicto*. Observatorio de Economía y Desarrollo.

Rocha, R. (2001). El narcotráfico y la economía de Colombia: una mirada a las políticas. *Planeación y Desarrollo*, 32(3), 427–470. Universidad de los Andes – CEDE.

Rodríguez, P. (2023). *Políticas de desarrollo económico en contextos de narcotráfico*. Centro de Investigación Económica.

Sauls, L. A., Dest, A., & McSweeney, K. (2022). Challenging conventional wisdom on illicit economies and rural development in Latin America. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022>

Secretaría de Salud del Cauca. (2021). *Reporte de intervención sobre consumo de SPA*. Gobernación del Cauca.

Steiner, R., & Corchuelo, A. (1999, diciembre). *Repercusiones económicas e institucionales del narcotráfico en Colombia*. CEDE, Universidad de los Andes. https://www.bibliodrogas.gob.cl/biblioteca/documentos/ESTADISTICAS_CO_5359.PDF

UNODC. (2016). *Informe mundial sobre drogas*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

UNODC. (2021). *Informe de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

UNODC. (2022). *Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

UNODC, Presidencia de la República de Colombia, Agencia de Renovación del Territorio & Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. (2022). *Informe No. 24: Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata – componente familiar (corte al 31 de julio de 2022)*. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.
<https://www.unodc.org>

UNODC & SIMCI. (2006). *Características agroculturales de los cultivos de coca en Colombia*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/OF04012006-caracteristicas-agroculturales-cultivos-coca-colombia-2006-..pdf?csf=1&e=1a31j9>

World Bank. (2018). *Indicadores de desarrollo y acceso rural*. Washington, D.C.

World Bank. (2023). *Colombia: Systematic Country Diagnostic – Together for a Better Future*.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/867211653321214486/pdf/Colombia-Systematic-Country-Diagnostic-Together-for-a-Better-Future.pdf>

